

morena



9

Jul - dic, 2024

Conciencias

Pensar la TRANSFORMACIÓN



EL MUNDO DEL TRABAJO

Ariadna Montiel · Luis Munguía · Felipe Ávila
Ivonne Cisneros · Francisco Pérez Arce
Napoleón Gómez Urrutia · Armando Bartra
Margarita Nemecio · Óscar Rojas



ARTE

JOHANA HERRERA: POR UN REALISMO MEXICANO

Toda época transformadora es esencialmente creadora y su éxito puede ser medido por la capacidad de generar, sorteando obstáculos y contradicciones, un nuevo orden en el que las instituciones, las prácticas y las formas de sentir, pensar y socializar no responden ya al sistema de creencias del pasado, sino a un inédito sentido común en el que la fe por el porvenir inspira los esfuerzos cotidianos en todos los campos de la vida.

Desde hace seis años, nuestro país comenzó su marcha hacia el futuro. La Cuarta Transformación inició una etapa de la historia nacional que comenzó por evitar la caída hacia el abismo, ésa a que los gobiernos neoliberales nos habían empujado con su estela de corrupción, exclusión e injusticia. Así, durante este primer sexenio, hemos empezado a revertir buena parte de los efectos negativos heredados por el viejo régimen, llevando a cabo una reconfiguración institucional que busca extirpar del Estado y de quienes lo conforman los vicios y antivalores que caracterizaron el antiguo sistema y a sus diversas expresiones ideológicas, sociales y culturales. También ahí tenemos que dar la batalla.

Para Johana Herrera Méndez, escultora y pintora oriunda del Estado de México, el arte tiene una capacidad singular para remover las raíces más profundas de la existencia, es por eso que toda gran transformación social requiere generar una narrativa visual que dé cuenta del acontecimiento político y, al hacerlo, ayude a fortalecerlo en el imaginario colectivo. Una suerte de arte militante que, al ser reflejo del hecho revolucionario, sea capaz de mostrar sus potencialidades y despertar en sus espectadores la esperanza que sólo puede generar el trabajo artístico que pone en el centro de sus preocupaciones a la especie humana, no para degradarla bajo los principios de la sociedad de consumo, sino para recordar los elementos más nobles de ella: la solidaridad, la generosidad y la empatía. Ése es el arte que precisa la transformación en marcha; ése es el trabajo de los artistas que buscan dar cuenta de una realidad que ya no puede ser explicada según los cánones del tiempo pasado. Es un nuevo realismo mexicano que, como en este número de *Conciencias*, busca reivindicar a los hombres y mujeres que con su trabajo cotidiano y su firme convicción de lucha, moldean con esfuerzo un México de prosperidad, paz y oportunidades.

TRANSFORMACIÓN, BIENESTAR Y TRABAJO

En las primeras décadas del siglo XX, la organización de la clase trabajadora hizo posible algunas de las grandes transformaciones que cambiaron el rumbo de México, pues el proceso renovador de la Revolución Mexicana fue protagonizado por millones de trabajadores cansados de los abusos de la época porfirista, quienes asumieron la tarea de construir un país de derechos y justicia social para todos. Mineros, maestros, médicos, obreros, artesanos, campesinos, empleados, herreros, carpinteros, albañiles o panaderos, muy pronto se sumaron a los diversos frentes de lucha y sus sacrificios, desde las huelgas de Cananea (1906) y Río Blanco (1907) hasta los campos de batalla y el debate parlamentario en la Asamblea Constituyente de 1916-1917, fueron parte fundamental en la construcción del estado de bienestar que resultó del movimiento revolucionario y que garantizó derechos laborales, mejoras salariales y jornadas dignas de trabajo; un modelo de desarrollo que no implicó la desmovilización de los trabajadores, sino que fortaleció su organización a través de sindicatos y confederaciones e impulsó su participación en los diversos escenarios de la lucha política, unas veces en compañía de los sucesivos gobiernos y muchas otras en franca oposición a ellos.

Frente a los retos que implicaron la expropiación petrolera (1938) o la nacionalización de la industria eléctrica (1960); ante las dificultades que trajo el reparto agrario y el aumento de la producción agrícola; a la luz de los desafíos que supuso el proyecto para fortalecer los servicios de salud, educación, vivienda o transporte; los trabajadores fueron siempre un pilar fundamental del desarrollo nacional, condición de posibilidad de cada uno de los logros derivados del pacto social de 1917. De ahí la necesidad de velar por sus condiciones de vida, asegurando un marco legal que reglamentara la organización social del trabajo e instituyera los

mecanismos para defender los intereses de los asalariados. Ése fue, en su origen, el objetivo del artículo 123 de la Constitución de los Estados Unidos Mexicanos, tal como muestra el historiador Felipe Ávila en este número de *Conciencias*.

Trabajo digno y bienestar social son dos conceptos correlativos. Por eso, tras la instauración del modelo neoliberal (1982) y el desmantelamiento del orden revolucionario, no resulta extraño que la lógica privatizadora y de flexibilización de los derechos laborales trajera como resultado, al mismo tiempo que la vulneración sistemática de la clase trabajadora, el estancamiento general de la economía y el aumento constante de la desigualdad y la pobreza, así como cifras históricas de endeudamiento, desempleo y violencia. Un panorama que desde el año 2018 hemos comenzado a revertir con el inicio formal de la Cuarta Transformación, un hecho histórico, pacífico y democrático que ha recuperado el Estado social mexicano e impulsado una política que protege prioritariamente a millones de trabajadores y trabajadoras.

En este número de la revista deseamos mostrar este renacimiento, visibilizando los logros de la 4T en materia de bienestar y trabajo con los análisis de algunos de sus protagonistas: Ariadna Montiel (secretaria de Bienestar), Luis Munguía (presidente de la Conasami) y los legisladores Napoleón Gómez Urrutia e Ivonne Cisneros. Pero también buscamos reflexionar sobre los retos existentes de cara al segundo piso de la transformación, pues la obligación de celebrar lo logrado no debe llevar a obviar las tareas pendientes en materia de salarios, trabajo doméstico y campesino o los diversos retos que implica la construcción de un sistema laboral que supere definitivamente el modelo neoliberal. Para ello son los artículos de Armando Bartra, Margarita Nemecio, Francisco Pérez Arce y Óscar Rojas.

morena



MORENA

Presidenta: Luisa María Alcalde
Secretaria general: Carolina Rangel
Secretario de organización: Andrés Manuel López Beltrán

INSTITUTO NACIONAL DE FORMACIÓN POLÍTICA

Presidente: Rafael Barajas Durán
Coordinador general: Oscar Lemus

REVISTA CONCIENCIAS

Consejo editorial:

Armando Bartra, Atilio Boron, Blanca Montoya, Consuelo Sánchez, Elvira Concheiro,
Fernando Buen Abad

Editor: David Antonio Pérez Nava
Corrección: Carlos López
Diseño editorial: Manuel Pedrozo
Apoyo técnico: Carlos Segura
Arte: Johana Herrera Méndez (Nezahualcóyotl, Estado de México)

Sitio web: www.revistaconciencias.mx
www.infpmorena.com.mx

 [/concienciasmx](https://www.facebook.com/concienciasmx)

Distribución gratuita.
Prohibida su venta.



Las autoras y los autores ceden a la revista *Conciencias* del Instituto Nacional de Formación Política los derechos de reproducción y distribución de sus artículos para su divulgación en todos los países del mundo, en formatos impreso y digital; sin embargo, la responsabilidad por lo expresado en los artículos, reseñas y obras visuales es estrictamente de ellos.

Contenido

TRANSFORMACIÓN, BIENESTAR Y TRABAJO

4

BIENESTAR Y TRABAJO

ARIADNA MONTIEL

8

POLÍTICAS LABORALES DEL
PRIMER GOBIERNO DE LA 4T

LUIS MUNGUÍA CORELLA

11

REFORMAS HISTÓRICAS EN
MATERIA LABORAL

NAPOLÉON GÓMEZ URRUTIA

17

REFORMA A LA LEY DE PENSIONES

IVONNE CISNEROS

PENSAR EL TRABAJO

23

LABORES EXCÉNTRICAS

ARMANDO BARTRA

35

LA REALIDAD DE LAS Y LOS
JORNALEROS AGRÍCOLAS EN MÉXICO

ISABEL MARGARITA NEMECIO

42

LA CLASE OBRERA Y LA 4T

FRANCISCO PÉREZ ARCE

47

LA ECONOMÍA MIXTA DEL
SECTOR SOCIAL

ÓSCAR ROJAS SILVA

55

GÉNESIS DEL ARTÍCULO 123

FELIPE ÁVILA ESPINOSA

Bienestar y trabajo

LOS EJES ESTRATÉGICOS DE LA CUARTA TRANSFORMACIÓN

Ariadna Montiel

No debemos pretender que nuestra vía, el camino de la Cuarta Transformación, es la única vía posible para construir un Estado con justicia y bienestar. Lo que sí podemos hacer es compartir los aprendizajes y experiencias que hemos adquirido a lo largo de estos años: la principal de ella, que estando con el pueblo no podemos equivocarnos. Ésa es la lección más importante que aprendimos en el cumplimiento de nuestras responsabilidades diarias.

En este tiempo, hemos caminado de la mano del pueblo porque queremos hacer realidad el sueño de Simón Bolívar, El Libertador, quien deseaba construir una Patria Grande en donde la igualdad, la justicia y la libertad sean los pilares sobre los que se sostiene la paz y la prosperidad compartida.

Desde que inició el sexenio del presidente Andrés Manuel López Obrador, éste insistió en que «la mejor política exterior es la política interior». Conscientes de que la paz es fruto de la justicia y que ningún proyecto de nación es viable si persisten la marginación y la miseria, hicimos de los programas y pensiones para el Bienestar la piedra angular de la Cuarta Transformación. Así, a días de haber iniciado el segundo gobierno de la 4T, afirmamos que vamos por la ruta correcta, pues dimos importantes pasos para concretar el anhelo que persiguieron muchas generaciones: construir una nación justa e incluyente para todas y todos.

Cuando comenzó la transición, participamos en el diseño de la política de bienestar y, más tarde, en su operación. Gracias a la buena conducción del entonces presidente, ésta ha sido la estrategia más eficaz que hemos implementado para materializar un proyecto de nación cuyo horizonte es la justicia social. La Secretaría de Bienestar cumplió con

TRANSFORMACIÓN,
BIENESTAR Y TRABAJO

la misión de atender a los sectores que fueron olvidados por los gobiernos neoliberales. Ese México profundo, que fue empobrecido por una oligarquía, es el motor que impulsa nuestro movimiento y la razón por la que emprendimos un cambio radical de la vida pública.

Además de combatir grandes males como la corrupción, la desigualdad y la pobreza, asumimos la tarea de reconstruir la legitimidad del Estado. Para ello, era fundamental reconocer que su verdadero papel es garantizar los derechos del pueblo, de tal modo que la Cuarta Transformación no ha sido sólo un cambio de gobierno, sino de régimen político. Nuestra aspiración siempre ha sido estar a la altura de los momentos estelares de nuestra historia: la Independencia, la Reforma y la Revolución.

Con humildad, asumimos la tarea histórica que nos encomendaron. Como bien sostuvo el presidente, el pueblo organizado es quien hizo posible el triunfo electoral de 2018. Sin su respaldo, sería impensable un gobierno popular con prioridades muy distintas, como la austeridad y el combate a la corrupción. Por supuesto, la victoria alcanzada este año la debemos entender como una ratificación de ese mandato.

Por suerte, junto con nosotros, en América Latina han ascendido otros gobiernos con los que compartimos ideales, y aunque todos hemos sido asediados por una derecha que se resiste a renunciar a sus privilegios, el respaldo popular permite seguir con la transformación. Sin embargo, la confianza que nos brindó el pueblo la tenemos que respaldar con resultados. Por eso el objetivo de cada una de las decisiones es cumplir con los compromisos del movimiento, materializando

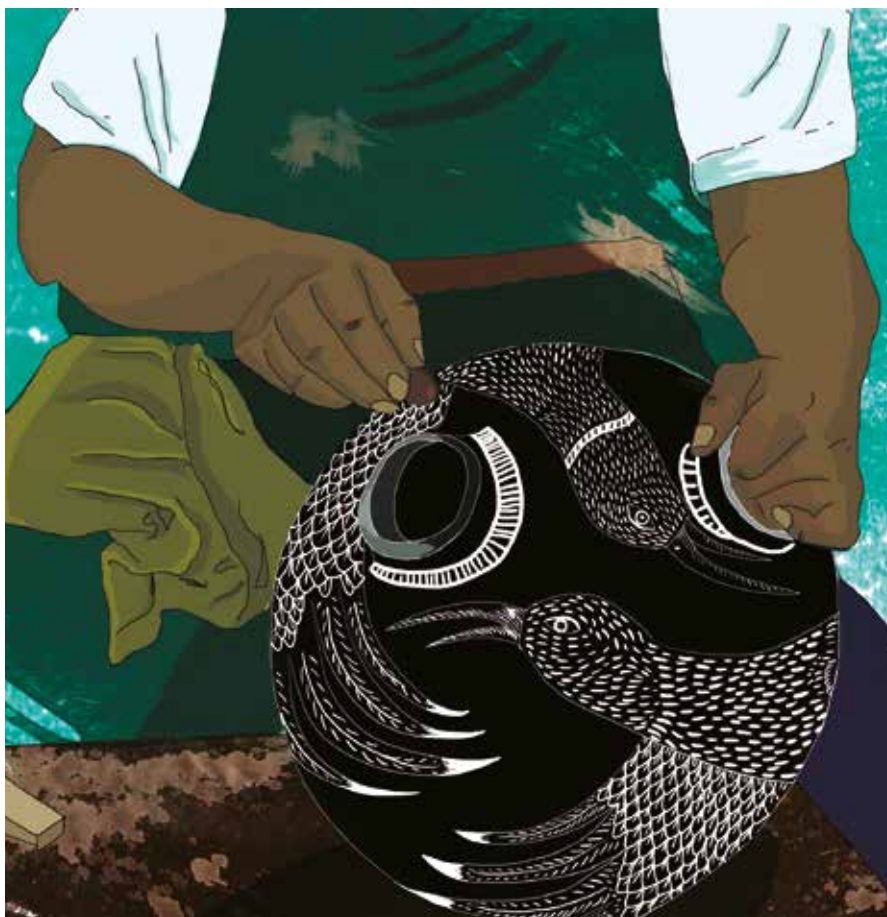
de la mano del pueblo un modelo cuya máxima prioridad son los derechos sociales de las personas. Así, con las pensiones y programas implementados, llegamos de manera directa y sin intermediarios a casi 29 millones de hogares, lo que nos permitió reducir la pobreza lacerante heredada por los gobiernos del pasado.

Esta política es el pilar de la transformación, porque es el resultado de muchos años recorriendo el territorio nacional, de escuchar a nuestra gente, recoger sus demandas y conocer de primera mano sus necesidades. Sobre todo, de entender que

el poder sólo tiene sentido cuando se pone al servicio de los más necesitados. Con orgullo, podemos afirmar que nuestro movimiento ha recuperado la dimensión ética de la política y la dimensión política de la ética. El bienestar de la gente, particularmente de la más vulnerable, se convirtió en el centro de las preocupaciones de una propuesta propia, que hoy reconocemos como el humanismo mexicano.

Por ningún motivo nos podíamos permitir fallar. Por eso, debimos poner la eficacia al servicio de los prin-

cipios. A la par, promovemos una política de derechos universales y un manejo responsable de la hacienda pública. Sólo así fue posible que la Secretaría de Bienestar incorpore a sus padrones a 14.4 millones de derechohabientes, a quienes destinará este año alrededor de 535 mil millones de pesos. Asimismo, actualmente tenemos a nuestro cargo la pensión no contributiva más grande del continente. Cada bimestre, más de 12 millones de adultos mayores hacen valer este derecho. A este programa se asignaron 465 mil millones de pesos.



Aunque Vicente Fox y el resto de los expresidentes exijan que se les devuelvan sus pensiones millonarias, nunca más se pagarán privilegios a costa del dinero del pueblo. Como muestra del abuso que perpetraron durante décadas los regímenes pasados, podemos indicar que con los 230 millones de pesos que sus pensiones costaban a los mexicanos, se cubre la entrega bimestral de la pensión a 38 mil adultos mayores o de 74 mil personas con discapacidad.

Nuestro compromiso es con el pueblo. Lo que se ha destinado a esta pensión es 6 veces más que la administración pasada y 21 veces más que la de Felipe Calderón. Así garantizamos que todas las personas adultas mayores tengan un ingreso suficiente para solventar sus necesidades. Y no sólo se trata de llegar a más personas, también de incrementar el monto. En los dos sexenios anteriores, la pensión sólo se incrementó 160 pesos; en cambio, nos bastaron 5 años para quintuplicar el monto. A pesar de que siempre hubo recursos suficientes, lo que no teníamos era un gobierno preocupado por atender las necesidades de la gente.

Seguiremos impulsando una política de derechos universales. Gracias a la solidaridad de nuestros aliados en el Poder Legislativo, incorporamos al artículo 4 constitucional las pensiones para adultos mayores y personas con discapacidad. La intención es avanzar aún más; por eso, en la iniciativa que el expresidente entregó en febrero de este año propusimos modificar la edad de acceso a las pensiones, propuesta que se ha hecho realidad en este inicio del segundo piso de la transformación.

Por la reforma constitucional, la fraternidad del pueblo y nuestra vocación de servicio, por primera vez en la historia de este país reivindicamos a las personas que viven con discapacidad. En la actualidad, 1 millón 482 mil personas en esa situa-

ción tienen acceso a una pensión no contributiva que asciende a 3 mil 100 pesos. Esto implica una inversión anual de más de 27 mil millones de pesos. Ahora las niñas, niños, adolescentes y jóvenes menores de 30 años, la población indígena y afro-mexicana son una prioridad absoluta; sin embargo, mediante convenios firmados con 21 autoridades estatales, comenzamos a registrar a quienes rebasan esa edad. Gracias a eso estamos transitando hacia la universalidad. Una atención temprana para las personas con discapacidad reeditarán en una mejor calidad de vida en el futuro. Por ese motivo, otorgamos dos millones 450 mil 248 sesiones de rehabilitación a 26 mil 703

niñas, niños y adolescentes.

Para atender a la niñez en todos los rincones del país, creamos el Programa de Apoyo para el Bienestar de Niñas y Niños, hijos de madres trabajadoras. Hoy, tenemos inscritos a 276 mil 416 beneficiarios. El gobierno de México invertirá 3 mil 67 millones de pesos para garantizar su derecho al cuidado y a un desarrollo adecuado a través de un apoyo bimestral de mil 600 pesos.

Para revertir el daño a la naturaleza y al tejido social que generó el modelo neoliberal, estamos impulsando Sembrando Vida, un programa con el que garantizamos que siempre haya trabajo y alimento en las mesas de quienes se encargan de alimentarnos. Además, es la política de reforestación más importante del mundo, porque combina las técnicas modernas con los saberes tradicionales.

Sembradores y técnicos conforman comunidades de aprendizaje campesino, que diseñan los sistemas agroforestales; en conjunto deciden cuáles

son las plantas más adecuadas para cada ciclo, según la región. Para el autoconsumo sembramos maíz y frijol. Las especias cultivadas son canela, pimienta y chaya. Producimos café, nopal y agave con fines agroindustriales y árboles frutales, como guanábana, durazno, limón, y maderables, como cedros, macuilis y pino. Todo ello es patrimonio de los campesinos.



Con Sembrando Vida, 442 mil 930 sembradores de 23 entidades reciben un jornal de 6 mil 500 pesos mensuales, lo que representa una inversión social cercana a los 39 mil millones. Además del impacto en las economías locales, logramos un beneficio ambiental, pues capturamos alrededor de 5.89 millones de toneladas de carbono, lo que equivale a la contaminación que producen cada año 1.5 millones de automóviles.

Nuestra postura humanista implica seguir esforzándonos todos los días para consolidar los Programas de Bienestar. Nos alegra muchísimo haber sido, junto con la política salarial, uno de los factores para que más de cinco millones de personas ya no vivan en situación de pobreza. Pero, ante todo, somos conscientes de que el fruto de nuestro trabajo, más que en las cifras, se refleja en la realidad de las mexicanas y mexicanos.

Ante este panorama, debemos aceptar que lo que estuvo en juego en las recientes elecciones, más que cargos, fue la continuidad de la transformación. En la mesa teníamos dos proyectos antagónicos con preocupaciones muy distintas. Mientras los neoliberales mantenían una fe ciega en el mercado, nosotros nos dejamos guiar por la sabiduría del pueblo. Trabajamos para ellos y gobernamos con ellos. Ahí radica la verdadera democracia.

Las diferencias son claras. Ellos hablan de servicios, nosotros de derechos. Por supuesto, hemos hecho todo para dar una atención eficaz y oportuna a los derechohabientes y, sobre todo, un acceso universal. Nadie es excluido por su condición económica, social o su color de piel. El trabajo de los tecnócratas era maquillar cifras, el nuestro es cambiar vidas.

Por nuestra política de austeridad y buen manejo de las finanzas públicas, podemos atender a más derechohabientes porque con menos hacemos más. Cuando llegamos a la Secretaría, veinte de cada cien pesos se destinaban

a los costos de operación. Nosotros desaparecimos lujos y privilegios, gastos innecesarios y contratos opacos, para que todo ese dinero se fuera a las pensiones y a otros apoyos a través de transferencias directas y sin intermediarios.

La felicidad y el bienestar del pueblo es el horizonte hacia el que debe caminar un gobierno instaurado por la vía democrática. Ha sido el pueblo quien ha logrado salvar al propio pueblo.

Con el buen gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador y con la revolución de las conciencias que hemos promovido, el triunfo de Claudia Sheinbaum fue contundente. Representa un referéndum sobre la continuidad de la política de bienestar que hoy se impulsan a través de sus principales programas. Pero estos logros no pueden entenderse de manera aislada, sino como una orientación de toda la política pública del gobierno de México, enfocada a revertir el desmantelamiento del estado de bienestar que impuso el neoliberalismo.

La mayoría de los ciudadanos que se expresaron en las urnas, ratificaron la continuidad de este proyecto que pone en el centro a los pobres, como principio ético-político para construir el bienestar para todos quienes integramos la nación. Por ello, se mantiene el compromiso de

que esta misma política de bienestar se sostenga en el nuevo gobierno, el segundo piso de la Cuarta Transformación, y se profundice con nuevas reformas a nuestra Constitución.

A todas las compañeras y compañeros de México y Nuestra América es importante ratificarles que lo que nos sostiene en nuestras tareas como funcionarios públicos es un enorme amor por ese mismo pueblo del que provenimos. No debemos olvidar de dónde provenimos, pues ésa es una manera de recordar responderle siempre al pueblo. Como acto de congruencia, atendemos el principio de mandar obedeciendo y reivindicamos la máxima de nuestro movimiento: «Por el bien de todos, primero los pobres».



Políticas laborales del primer gobierno de la 4T

Luis Munguía Corella

El pasado 2 de junio, Morena recibió en la jornada electoral un apoyo abrumador de la mayoría de la población. La oposición aún se pregunta qué sucedió; llega incluso a culpar al Instituto Nacional Electoral que hace tan sólo unos meses había defendido. Sin embargo, después de reflexionar y revisar los datos, la respuesta está a simple vista. Durante este sexenio los indicadores económicos, sociales y laborales han mostrado mejoras significativas, lo que explica en gran medida el resultado electoral. El salario mínimo se ha incrementado 116 % en términos reales, comparado con 0.5 % de crecimiento con Felipe Calderón. El salario promedio de los más pobres subió 98.9 %, con Calderón cayó 0.7 %. A pesar de la pandemia, la pobreza se redujo en 4.9 puntos porcentuales, con Calderón subió 2.3 puntos. Finalmente, la desigualdad en México bajó 18.4 %, mientras que en el sexenio de Calderón subió en 3.2 %.

La evidencia está en nuestros ojos. Durante la Cuarta Transformación el mundo laboral en México se transformó radicalmente. Se convirtió en un mundo mucho más justo, equitativo, con salarios más dignos y mayor bienestar; un nuevo mundo que se ha construido desde un movimiento integral, donde todos los que lo componemos llevamos el nuevo orden en nuestros corazones.

1. SALARIO MÍNIMO

Uno de los ejes centrales de la política laboral de la 4T ha sido el aumento del salario mínimo. Desde el inicio de esta administración, se implementaron medidas significativas para incrementar el salario mínimo en todo el país, incluyendo la Zona Libre de la Frontera Norte (ZLFN). En esta región, además de au-

mentar los salarios, se redujeron los impuestos, lo que permitió una mejora considerable en el poder adquisitivo de los trabajadores. Críticas y dogmas neoliberales sugerían que un incremento del 100 % en el salario mínimo tendría un efecto mínimo en los precios y un aumento moderado en los costos laborales; sin embargo, los estudios realizados por la Comisión Nacional de Salarios Mínimos (Conasami) y el Banco de México han demostrado que no hubo impacto ni en precios ni en el empleo, sino más bien aumentaron los salarios de los que menos tienen.

Inicialmente, el sector empresarial no estaba muy convencido de los aumentos al salario mínimo; sin embargo, cuando observaron que en la ZLFN no hubo inflación el primer año a pesar de un incremento del 100 % en el salario mínimo y que el consumo se incrementaba fortaleciendo el mercado interno, comenzaron a sumarse a esta política. Esta experiencia demostró que un salario mínimo más alto puede coexistir con una economía estable y aumentar el crecimiento.

El sector de los trabajadores, acostumbrado a las políticas neoliberales, temía que subir el salario se traduciría en inflación y desempleo. No obstante, cuando esto no ocurrió y presionados por la democracia sindical, también se sumaron al apoyo de estas políticas. Esta transformación fue posible gracias a la evidencia de que los aumentos salariales podían mejorar las condiciones de vida sin afectar negativamente la economía. Además de que sus agremiados cada vez exigen más y los líderes sindicales tienen que rendir cuentas.

Recuperación del poder adquisitivo

El salario mínimo en México alcanzó su mayor poder de compra en 1976, pero en los siguientes 25 años perdió el 75 % de su valor. Desde 2019, ha habido una recuperación notable del

salario mínimo del 116 %; alcanzó el 65.3 % de su valor máximo histórico en el resto del país. Los aumentos recientes han beneficiado a millones de trabajadores, se cerró la brecha salarial de género y sacó a millones de personas de la pobreza. Este esfuerzo ha sido un paso decisivo hacia una mayor justicia social.

Impacto en la economía

Diversos estudios han demostrado que el aumento del salario mínimo no ha tenido efectos negativos significativos en la inflación o el empleo. Por ejemplo, un estudio realizado por la Conasami en 2023, que utilizó un control sintético para comparar la ZLFN con el resto del país, no encontró efectos inflacionarios. En términos de empleo, se ha concluido que el salario mínimo no afecta negativamente el empleo debido a la naturaleza monopolística del mercado laboral mexicano. Esto significa que los empleadores tienen un poder significativo para fijar salarios debido a la falta de competencia por los trabajadores.

2. REFORMA LABORAL

La reforma laboral de la 4T ha sido otro pilar fundamental. Esta reforma se centró en promover la democracia sindical, la transparencia, la inclusión de género y en acelerar la justicia laboral. Se creó el Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral y se implementaron elecciones por votación anónima para elegir a los dirigentes sindicales. La evaluación del impacto de esta reforma mostró que los empleadores que legitimaron contratos colectivos pagan salarios más altos y experimentan una menor rotación de empleados. Estas medidas han fortalecido los derechos de los trabajadores y han mejorado la calidad del empleo en México.



La democracia sindical ha tenido efectos significativos en la vida sindical; por ejemplo, en la elección del sindicato de Pemex, aunque ganó la misma planilla de siempre, ésta tomó ideas de la planilla perdedora, como cambiar el sistema para subir niveles en la nómina y hacerlo más meritocrático. Este cambio ha permitido una mayor justicia y transparencia en la gestión sindical, que beneficia a los trabajadores y promueve una cultura de mérito.

3. REFORMA DE SUBCONTRATACIÓN (OUTSOURCING)

La reforma de subcontratación u *outsourcing* fue diseñada para prohibir la subcontratación de empleados en actividades esenciales, lo que obliga al empleador a reconocerlos como empleados directos. Esta reforma busca mitigar los acuerdos de empleo simulado y la evasión fiscal. Los resultados han sido impresionantes, con un aumento significativo en los salarios y en la participación en utilidades, lo que beneficia a millones de trabajadores. Como dijo Andrés Manuel López Obrador, «con esta reforma estamos poniendo fin a los abusos y garantizamos los derechos de los trabajadores».

Una práctica común antes de la reforma era el *insourcing*, donde una misma empresa creaba dos filiales: una donde estaban todos los trabajadores y otra donde sólo estaban los dueños. Con esto, declaraban 0 ganancias en la

filial con los trabajadores y evitaban pagar el reparto de utilidades. Con el cambio en la ley estas prácticas se erradicaron y hubo casos donde los trabajadores pasaron de recibir 1 peso a 100 mil pesos por reparto de utilidades. Esto ha sido fundamental para la justicia laboral y la dignificación del trabajo en México.

4. JÓVENES CONSTRUYENDO EL FUTURO

El programa Jóvenes Construyendo el Futuro ha sido una iniciativa clave para ofrecer experiencia profesional, apoyo económico y seguro de salud a jóvenes que no trabajan ni estudian. Evaluaciones del programa muestran que ha aumentado significativamente la probabilidad de empleo y el acceso a servicios de salud para sus participantes, con un impacto mayor en hombres que en mujeres. En promedio, el 60 % de los participantes encontraron empleo durante 2022. Este programa no sólo proporciona oportunidades laborales, también es una herramienta importante para la inclusión social y económica de los jóvenes.

CONCLUSIÓN

Las políticas laborales implementadas durante la 4T han tenido efectos positivos significativos en la economía y en la vida de los trabajadores mexicanos. Los aumentos del salario mínimo han mejorado el poder adquisitivo y reducido la pobreza, las reformas laborales han promovido la justicia y la transparencia, y la reforma de subcontratación ha incrementado los beneficios para los empleados. Finalmente, programas como Jóvenes Construyendo el Futuro han brindado oportunidades esenciales para los jóvenes del país. Estas políticas reflejan el compromiso del gobierno de la 4T con la justicia social y la equidad y marca un nuevo rumbo en la historia laboral de México, pues construye un mundo nuevo para todos, mucho más equitativo y digno.



Reformas históricas en materia laboral

Napoleón Gómez Urrutia

En 2018, nuestra legislación laboral presentaba un grave rezago de más de 70 años, cuyo único resultado fue acrecentar las desigualdades, las injusticias y la impunidad. Sin embargo, los últimos seis años han llenado de esperanza a nuestro país y a su pueblo, gracias a la profunda transformación que vivimos en esta administración. Así, desde la Comisión de Trabajo y Previsión Social del Senado de la República, se contribuyó al cambio estructural al impulsar reformas históricas, modernas y de gran trascendencia para el movimiento obrero. La Cuarta Transformación no era posible sin las y los trabajadores y era urgente resarcir los daños que sufrieron en las administraciones neoliberales. Con los principios y valores de esta etapa transformadora, era necesario reivindicar a la clase trabajadora, pues es el motor principal para el crecimiento económico y social de nuestra nación.

La discusión, revisión y modernización del marco legislativo laboral ha impactado positivamente en la fuerza de trabajo. Los beneficios de una legislación progresista y de derechos en este ámbito han creado una reacción en cadena, produciendo un círculo virtuoso que no sólo permite el crecimiento y la estabilidad económica sino que restituye el tejido social.

En nuestro país existen 60 millones de personas económicamente activas, de las cuales 24 millones pertenecen al sector formal y 36 millones al informal. Todas y todos ellos, con su esfuerzo y mano de obra capacitada, aportan al país y buscan el sostén de sus familias, quienes representan entre el 80 y el 85 % de la población. Por tanto, los cambios positivos en la cultura del trabajo terminan por beneficiar a casi todo nuestro pueblo. De ahí la importancia esencial de la defensa de los derechos laborales y las acciones concretas para su aplicación efectiva.

La hipótesis es clara: cambiando para bien el mundo laboral se impacta con gran magnitud en la clase trabajadora y en el pueblo de México, de modo que los esfuerzos concentrados en esta área sirven para fortalecer y garantizar la continuidad de la democracia. En efecto, una verdadera y robusta democracia es aquella que puede producir prosperidad compartida, que goza de la igualdad ciudadana y de la justicia en todos sus procedimientos. Por tanto, la prosperidad compartida va más allá del ámbito material y económico; también se encuentra en los procesos sociales para alcanzar la justicia a través de la política organizada y efectiva, en la colaboración entre el gobierno y la sociedad civil, en la correcta legislación y aplicación de la ley, en la distribución de recursos y en una larga lista de acciones que, poco a poco, transforman una nación, encaminándola hacia un mejor futuro.

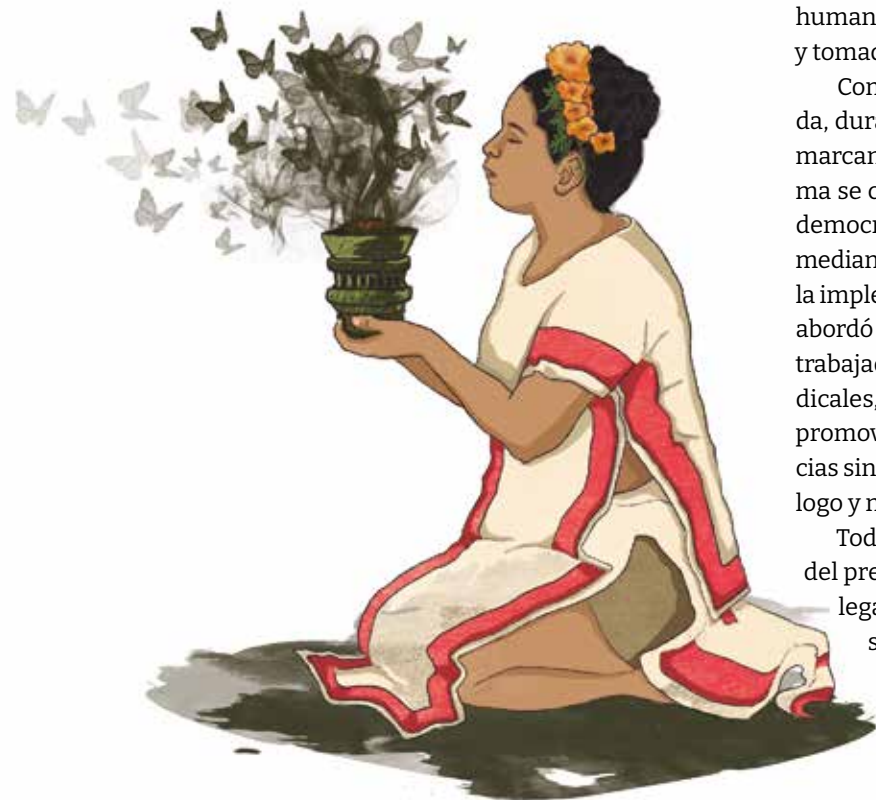
Bajo este marco, la labor de un líder sindical es la de avivar la lucha obrera, representando la inspiración y la voz de cientos de miles de trabajadores y de todos los actores productivos que contribuyen directamente al crecimiento del país. Así, al comenzar el primer sexenio de la 4T, el presidente Andrés Manuel López Obrador convocó a un amplio grupo de hombres y mujeres para asumir cargos en las diversas instituciones del Estado, quienes debieron asumir la importancia del compromiso con el pueblo de México, ése que durante más de tres décadas se vio afectado por una política laboral adversa, diseñada por gobiernos neoliberales con la intención de debilitar el movimiento obrero y favorecer a la clase empresarial.

En 2018, el horizonte nacional en esta materia tenía problemas arraigados y muy graves: los abusos, la precariedad laboral, la escasez de oportunidades y la violación de los derechos de la clase obrera eran prácticas sistemáticas en todo el país. Los trabajadores se encontraban en condiciones indignas, con salarios bajos e inseguridad en sus centros de trabajo. La ausencia de una regulación adecuada y de un sistema de protección social sólido dejaba a millones de mexicanos desamparados frente a situaciones como la pérdida de empleo, de enfermedades o hasta de la vida. Esta situación no sólo afectaba la calidad de vida y las condiciones de los trabajadores y sus familias, sino que también frenaba el desarrollo económico, político y social de nuestra nación. En este contexto, el compromiso y la voluntad política en esta administración, de izquierda y progresista, ha sido transformar el mundo laboral desde la raíz para mejorar significativamente el futuro de México.

El trabajo legislativo comenzó con mucha fuerza: en 2018, fue impulsado el Convenio 98 de la Organización Internacional del Trabajo, el cual sienta las bases y principios para ejercer el derecho a la libre asociación, es decir, a la sindicalización y la negociación colectiva. Es imprescindible defender el derecho a la vida sindical en México, pues a través de debilitarla fue como las administraciones anteriores tuvieron campo abierto para perpetuar un sinfín de injusticias sistemáticas. Desde el primer momento, la Comisión de Trabajo y Previsión Social de la Cámara de Senadores mostró una perspectiva de derechos humanos para garantizar que la clase obrera fuera escuchada y tomada en cuenta.

Con la aprobación de la Reforma Laboral, integral y profunda, durante la conmemoración del primero de mayo de 2019 marcamos un hito histórico para los trabajadores. Esta reforma se centró en temas de gran relevancia, como la libertad y democracia sindical, el derecho a una justicia laboral expedita mediante la creación de una etapa de conciliación obligatoria y la implementación de juicios laborales más ágiles. Además, se abordó la transparencia en los sindicatos, garantizando que los trabajadores estén informados sobre el uso de sus cuotas sindicales, así como la inclusión con perspectiva de género, que promovió una mayor participación de mujeres en las dirigencias sindicales y aseguró su participación, representación, diálogo y negociación dentro de los sindicatos.

Todos los sectores para quienes se dirigieron las reformas del presente sexenio, en el pasado habían sido ignorados, relegados y vulnerados. La precarización integral de las personas trabajadoras posibilita algunos mecanismos de violencia laboral específicos de cada sector. Un ejemplo claro es la simulación y la violencia dentro de la vida sindical, que es un método usual del capitalismo



descarnado para desarmar la cooperación y la organización obrera, lo que permite individualizar la lucha, debilitar las causas e imponer su poder. En este contexto, impulsar una reforma era primordial para sentar las bases de la transformación, pues coloca cimientos sólidos para la dignidad y la justicia, elemento indispensable en el goce efectivo de los derechos.

Por un lado, uno de los ecos positivos en el presente es el renovado interés por el sindicalismo; por otro, la inminente modernización de los sindicatos nacionales auténticos. Éste ha sido un triunfo monumental que permitió salvaguardar la integridad de la clase trabajadora y saldar deudas históricas con quienes producen la riqueza de nuestro país. En adelante, y gracias a estos avances, ha sido posible concentrar esfuerzos en proponer soluciones legislativas a vulneraciones claras e inaceptables de los derechos humanos y laborales de millones de personas trabajadoras. El trabajo ha sido arduo, porque fue preciso modificar de fondo las estructuras más fundamentales, reformando leyes que llevaban 50 años o muchos más sin revisarse y actualizarse, y que claramente cumplían el único propósito de beneficiar a la clase empresarial y no a los trabajadores.

Es fundamental garantizar las condiciones de igualdad para cerrar paso a cualquier posibilidad de abuso o trato diferenciado e injusto. Nuestro país, desafortunadamente, aún tiene una cultura laboral que desfavorece a las mujeres, es por ello que son necesarias acciones concretas para ampliar la protección que les brinda la ley para que puedan defenderse. Por ello, en primer lugar, la 4T impulsó una importante reforma destinada a lograr la igualdad salarial entre mujeres y hombres, cuyo objetivo prioritario en la política nacional es el diseño, implementación, ejecución y evaluación de medidas para mejorar el

acceso de las mujeres al empleo y garantizar la aplicación efectiva del principio de igualdad de trato y no discriminación en las condiciones laborales. Para ello se busca fomentar prácticas que impulsen el desarrollo integral de todas y todos los empleados. Por principio de justicia, a trabajo igual, salario igual. Con esta reforma se logró garantizar que más de 25 millones de mujeres trabajadoras del país se vieran beneficiadas.

Además, se hizo la propuesta de mejorar las condiciones para las madres trabajadoras que garantizara su derecho a una lactancia adecuada, accesible, digna, privada e higiénica mediante la creación de salas de lactancia en sus lugares de trabajo. Esta medida contribuye a fomentar un entorno laboral más saludable, empático y equitativo, al tiempo que proporciona beneficios significativos para la salud de la madre y el óptimo desarrollo de su hija o hijo.

En términos de homologar la ley, con el objetivo de fortalecer la igualdad de género y considerando la exclusión de ciertos grupos de la población

y la falta de aplicación de la ley debido a prácticas anticuadas en su redacción, se propuso una reforma para actualizar los conceptos de trabajador y empleador, sustituyéndolos por personas trabajadoras y personas empleadoras, respectivamente. La reivindicación de la clase trabajadora debe incluir a las mujeres y construir contextos donde puedan desarrollarse con libertad, pleno reconocimiento y sin violencia.

Asimismo, más de 2.5 millones de personas trabajadoras del hogar por primera vez recibieron reconocimiento a su labor que durante años había sido invisibilizada, y se les garantizaron derechos básicos, como jornadas de ocho horas, vacaciones, aguinaldo y seguridad social obligatoria, acceso a servicios médicos hospitalarios y medicamentos, incapacidad por enfermedad general o accidente de trabajo, pensión por invalidez, ahorro para el retiro, así como guarderías para el cuidado de sus hijos. En esta reforma, que modifica la Ley Federal del Trabajo y la Ley del Seguro Social, se muestra un ejemplo concreto del



impacto a gran escala de un buen marco laboral: las y los beneficiados son también las familias, con lo que la prosperidad y la protección se extienden a otros sectores de la sociedad.

Siguiendo la línea de las reformas realizadas en pro de la inclusión, otro gran esfuerzo y objetivo cumplido fue armonizar la normativa de la aviación civil con el Convenio sobre Aviación Civil Internacional de 1944. Con esto, se reconocen y protegen los derechos laborales de la tripulación de aeronaves civiles, así como la seguridad y la gestión de accidentes e incidentes. Entender la legislación en materia laboral de manera integral implica abordar las necesidades específicas de cada sector, al asegurar que las acciones emprendidas beneficien a quienes están involucrados en ellos. Ahí hay un elemento de inclusión importante, pues permite que la propuesta genuinamente responda a necesidades específicas.

Hoy, cerca de 3 millones de personas adultas mayores pueden tener acceso a empleos remunerados que se ajusten a sus habilidades, profesiones u oficios. Además, se prohibió que los empleadores se nieguen a contratar a personas mayores, ya que esto constituye un acto de discriminación y violación de sus derechos. Si bien la ley debe encaminarse a garantizar cada vez más pensiones dignas, las personas adultas mayores no deben ser excluidos del sector productivo de la sociedad, porque eso los deja completamente vulnerables y en un estado de precariedad. Proteger a sectores invisibilizados es ponerlos en el centro del proyecto de nación que logramos en este sexenio: sólo así podremos lograr la igualdad de derechos.

En el Sindicato Nacional de Trabajadores Mineros, Metalúrgicos, Siderúrgicos y Similares de la República Mexicana se promovieron diversas iniciativas para ampliar la libertad y protección sindical. Entre ellas, está un punto de acuerdo que solicita a distintas dependencias del Ejecutivo Federal, organizaciones sociales, sindicatos y sector empresarial la ratificación del Convenio 176 de la Organización Internacional del Trabajo sobre Seguridad y Salud en las Minas. Esta ratificación es crucial para ampliar y fortalecer la seguridad e higiene en los lugares de trabajo que aún enfrentan desafíos considerables y que afectan la salud y la integridad de los trabajadores mineros. Es inaudito que la clase empresarial siga negándose a invertir en este asunto prioritario, lo que es una señal de la prevalencia de la costumbre neoliberal de no valorar a la clase trabajadora y sólo sacar el mayor provecho.

Afortunadamente, este gobierno se ha distinguido por un enfoque humanista en cuestiones laborales, y pone el acento en cambios integrales que no dejen de lado ningún aspecto. La seguridad y la higiene son básicos y necesarios para que una persona pueda desempeñarse adecuadamente. Es, además, un motivo de justicia social. En conmemoración de nuestros compañeros que han sido afectados o incluso han perdi-

do la vida, debemos mantenernos firmes y redoblar esfuerzos para garantizar condiciones seguras y óptimas.

También se impulsó y aprobó el proyecto de decreto que reconoce el derecho de los trabajadores a gozar de buena salud, lo que es fundamental para una atención médica adecuada y la detección oportuna de diversas enfermedades. Esta reforma permite a los trabajadores tomar un día del año, con salario íntegro, para someterse a estudios médicos de detección temprana del cáncer, especialmente cáncer cervicouterino, de mama o de próstata, así como otras enfermedades crónicas que determine la Secretaría de Salud. El cuidado de sí mismo no debe ser un motivo para perder sus ingresos; al contrario, el trabajo debe poner las condiciones para extender el bienestar y una vida saludable, pues de lo contrario sería una mera relación de explotación, lo que va en contra de los principios de justicia y dignidad. El trato humano y el derecho a la salud garantizan un aumento en la calidad de vida, contribuyen a la seguridad y a la prevención de enfermedades.

Aunado a esto, se propusieron jornadas de salud dirigidas por profesionales certificados en psiquiatría, con el fin de apoyar a los trabajadores en el cuidado y protección de su salud mental. A pesar de los avances, todavía persisten prácticas perjudiciales que ponen en riesgo la salud mental de los trabajadores: las jornadas excesivas, la falta de apoyo y reconocimiento, la discriminación, la sobrecarga de trabajo y la falta de oportunidades de desarrollo profesional, entre otros. Esta iniciativa tiene como objetivo proteger y garantizar el acceso de los trabajadores a una atención integral y digna, que incluya el tratamiento de diversas enfermedades mentales.

Hemos consolidado grandes avances en la construcción de un terreno común que promueva y haga realidad contextos donde el cumplimiento total de los derechos sea la norma, no la excepción. Una iniciativa clave en este sentido fue una adición a la Ley General de Educación, la cual busca incluir el estudio de los derechos laborales en los planes y programas de estudio impartidos por el Estado. Esto permitirá que desde temprana edad los ciudadanos mexicanos puedan conocer los recursos disponibles para protegerse ante posibles abusos o violaciones a sus derechos en sus espacios de trabajo. Al invertir en una educación que aborde estas cuestiones, las injusticias se volverán más evidentes, lo que nos llevará a avanzar hacia un mundo con mayor dignidad y conciencia.

Por otro lado, se visibilizaron diversas injusticias y se preservó nuestra memoria histórica para comprender cuánto hemos avanzado a lo largo del tiempo. Por ejemplo, se propuso la emisión de una moneda conmemorativa en honor al aniversario 117 del inicio de la Huelga de Cananea, con el fin de destacar la importancia de este evento. Los símbolos conmemorativos sirven para reconocer a los personajes que admiramos y para

reafirmar nuestra identidad nacional en el discurso social.

Con estas propuestas atendemos al sector educativo y cultural, donde también es necesario tener formación en asuntos laborales para modificar nuestra perspectiva. En principio, es menester que las personas tengan claridad sobre sus derechos, las leyes que los protegen y los mecanismos que pueden emplear en caso de ser sujetos de algún abuso. Por otro lado, abonar en el capital simbólico nos permite recordar que parte de nuestros héroes nacionales han sido trabajadores que han luchado y entregado todos sus recursos por una vida justa y digna. La búsqueda del bien y de la justicia es uno de los estandartes de la clase trabajadora y esta conmemoración permite no olvidar de dónde venimos y adónde vamos.

A lo largo de este sexenio hemos concretado cambios significativos que han tenido un impacto notable en la vida pública de millones de mexicanas y mexicanos. En estos años, se aprobaron más de 160 reformas en diversas áreas, como el teletrabajo, la regulación del salario mínimo, la eliminación de la subcontratación, los permisos por paternidad, la desconexión digital, las licencias para exámenes médicos, los derechos laborales de las personas con discapacidad o trabajadoras del hogar y del campo, la no discriminación, entre otras. Estas reformas buscan garantizar un ambiente de trabajo digno, próspero, seguro y justo para todos los mexicanos, ya que los derechos laborales son derechos humanos que deben protegerse y garantizarse.

Una de las reformas más discutidas fue la regulación de la subcontratación, que beneficia a cerca de diez millones de trabajadores al prohibir la subcontratación de personal y permitir únicamente la subcontratación de servicios y obras especializadas. Ahora, las empresas están obligadas a distribuir el 10 % de sus

utilidades a través de dos modalidades a elegir: una puede ser de hasta 90 días de salario; otra, el promedio de los últimos tres años, según lo que resulte más favorable para el trabajador. Esta reforma produjo una difusión de información importante, la cual puso estos contenidos en el centro de la discusión pública. Por fin se señalaba la injusticia de la flexibilización que precariza gravemente, fomenta la explotación y la simulación en el trabajo.

Otro de los logros más significativos durante este periodo fue la aprobación del proyecto de decreto para reformar los artículos 76 y 78 de la Ley Federal del Trabajo en relación con las vacaciones dignas, lo que significó una reforma histórica en esta materia que aumentó de 6 a 12 días para el primer año de trabajo y alcanza hasta 32 días de vacaciones para aquellos con más años de servicio. Este cambio radical transformó el panorama del descanso y esparcimiento para más de 35 millones de mexicanos

que trabajan en el sector privado, ya que desde 1970 no se habían incrementado los días de vacaciones en nuestro país y, antes de eso, desde los inicios de la Revolución Mexicana. Así, la reforma de vacaciones dignas atiende una necesidad básica en la vida de la clase trabajadora, que fue ignorada por más de 50 años, por eso decimos que es histórica: por el aumento de los días de descanso, pero también porque con ella el protagonista es el trabajador, su bienestar y descanso plenos.

Es fundamental revertir la lógica neoliberal, pues no porque el sector empresarial tenga privilegios eso se traduce en mejores condiciones para los trabajadores. En su lugar, cuando actuamos directamente en beneficio de la clase trabajadora, garantizamos que los logros en productividad lleguen a las empresas y participen del crecimiento nacional.

La defensa de los derechos laborales es crucial para el progreso de Méxi-



co. Cuando los trabajadores se sienten valorados y protegidos son más comprometidos y productivos, lo que se traduce en un crecimiento económico sostenible que contribuye al avance de una sociedad más justa y equitativa. La cultura laboral debe promover valores como la equidad, la diversidad y la inclusión. En este sentido, es imperativo garantizar espacios de trabajo seguros y saludables donde todos los empleados tengan la oportunidad de desarrollarse plenamente. Esta prioridad debe continuar en la segunda etapa de la transformación, ya que sólo así se robustecen condiciones decentes y se cierra la puerta a futuros abusos e injusticias. Se trata aquí de desarrollar un nuevo modelo que se apegue estrictamente a los derechos humanos y los garantice. Para ello, se han propuesto instrumentos legislativos para generar oportunidades significativas y seguras para todas las y los trabajadores, centrándose en la construcción de una fuerza laboral más diversa e inclusiva. Mejorar nuestra cultura del trabajo y defender nuestros derechos son fundamentales para construir una sociedad más justa y próspera.

Todos los logros alcanzados son frutos de la histórica resistencia obrera de nuestro país. Nunca hay que olvidar que gobiernos del pasado, en contubernio con empresarios corruptos, intentaron de múltiples formas acallar la exigencia de millones de trabajadoras y trabajadores por una vida más digna y justa. Decenas de luchadores obreros perdieron la vida y a otros les costó el exilio, pero hoy estamos de vuelta, con más fuerza y seguros de que con la Cuarta Transformación reivindicaremos nuestra lucha. No olvidemos los desafíos enfrentados; al contrario, usemos eso como inspiración y apliquemos toda nuestra experiencia, conocimiento y compromiso para seguir impulsando un cambio significativo en nuestra sociedad.

En los últimos seis años hemos logrado importantes transformaciones que han modificado estructuralmente el panorama laboral para las generaciones presentes y futuras. Sin embargo, aún quedan pendientes y deudas históricas que resolver, como garantizar un aguinaldo digno, derechos laborales a las y los trabajadores de plataformas digitales como Uber, Didi y Rappi, así como reformar el sistema de pensiones, reducir la jornada laboral y fijar el aumento al salario mínimo para que jamás sea inferior a la inflación; además, fijar un piso parejo entre trabajadores del apartado A y B. Hoy más que nunca debemos seguir trabajando y manteniendo voluntad política para elaborar una agenda laboral integral que permita a los ciudadanos alcanzar su máximo potencial y disfrutar de una vida digna y un futuro mejor. Pero también debemos reflexionar con alegría y orgullo por los logros y objetivos cumplidos. El trabajo realizado en esta materia ha sido monumental, trascendente y edificador.

La consolidación de la Cuarta Transformación despierta nobles esperanzas: continuaremos sirviendo al pueblo de Mé-

xico en unidad y con gran fortaleza. Nuestro movimiento ha demostrado que sí es posible cambiar las cosas, priorizando los derechos humanos, la prosperidad compartida y una democracia saludable que promueva el bienestar nacional.

El pueblo puede estar tranquilo, pues no le hemos fallado. Durante este gobierno se trabajó incansablemente para recuperar los derechos perdidos y negados por los gobiernos neoliberales, y trabajando juntos fortaleceremos y avanzaremos en la transformación durante los próximos años hacia un mayor estado de bienestar, en conexión estrecha con el pueblo y el compromiso firme de abordar las necesidades principales de los menos favorecidos. Con determinación, avanzaremos para eliminar las desigualdades, brindar justicia y garantizar una vida digna para todos y todas.



Reforma a la Ley de Pensiones

RETIRO DIGNO PARA LAS Y LOS TRABAJADORES

Ivonne Cisneros

El sistema de Pensiones para el Bienestar es un fondo monetario destinado para compensar el daño hecho a los trabajadores a través de las cuentas individuales administradas por las Afores. Es un fondo solidario y complementario para que los trabajadores puedan recibir mejores pensiones, pues lo que buscamos es el bienestar de la clase trabajadora, de las personas que ya tienen el derecho a jubilarse y no lo han hecho porque, al llegar la edad de su retiro, se dan cuenta de que su pensión no equivale ni siquiera al 40 % de lo que percibían. Por eso, es importante llevar a México a la reconstrucción de un sistema solidario en el que las personas puedan jubilarse con el 100 % de su salario de cotización.

Desde su anuncio y creación, el pasado primero de mayo, se han dicho muchas mentiras sobre el proyecto. Han afirmado que lo que se busca es robar las pensiones de la gente; que es un abuso de la propiedad privada de las personas; que el gobierno de la Cuarta Transformación toma las cuentas individuales de los trabajadores y las expropia; que los recursos no serán suficientes; que el verdadero motivo es desviar estos recursos para otros fines. Todas estas afirmaciones han sido promovidas por los medios de comunicación de la derecha, en su intento de confundir a la población y hacerles pensar que esta reforma no es para beneficiarlos.

Para desmentir estas ideas, es importante explicar por qué y para qué se está impulsando este mecanismo. Primero, hay que decir que se impulsa por el deseo de garantizar a los trabajadores un retiro justo con el 100 % de su salario de cotización. Esto comenzó a ocurrir en julio de este año con las personas que tienen derecho a jubilarse y están en cuentas individuales. Ellas recibirán la cantidad que tenían en su

ahorro, más un complemento que les permitirá retirarse con el 100 % de su salario de cotización. Es una realidad, no una promesa.

Las pensiones son lo más significativo de la seguridad social, la cual se estableció en muchos países, incluido México, como un derecho humano hace muchas décadas. A la seguridad social la componen un conjunto de aspectos: salud, pensiones, derecho a la recreación, cultura, vivienda y esparcimiento. Cuando hablamos de ella, nos referimos al bienestar de las personas desde que nacen hasta que fallecen, pues también implica proteger a los beneficiarios de las personas que mueren a través del mecanismo que otorga la posibilidad de heredar una pensión. Por lo tanto, hablar de seguridad social es hablar prácticamente del bienestar de los trabajadores durante toda su vida, así como de la protección de sus familias.

En México, el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) se construyó con esta visión integral, es por eso que cuenta con una red de instituciones de salud, un sistema de pensio-

nes y centros vacacionales como Oaxtepec, en el estado de Morelos, así como centros de desarrollo integral, teatros y cines. A muchas personas les parece extraño que el IMSS cuente con todos estos servicios, pero es así porque la seguridad social se concibió en su origen como algo más que atención médica. Desde su creación, en 1943, el IMSS ha crecido en instalaciones y programas para mantener esta integralidad, al igual que el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales para los Trabajadores al Servicio del Estado (ISSSTE).

Dentro de esta lógica integral, se construyó un sistema de pensiones conocido como sistema de pensiones solidario, intergeneracional y de beneficios definidos, lo que significa que todos los trabajadores, desde que empiezan a laborar, contribuyen a la seguridad social: una parte de su salario se destina a la pensión y otra a la atención médica, y con estas contribuciones se conforma un fondo que se maneja de manera solidaria para que cuando las personas cumplan determinada edad y años de servicio, pueden retirarse con una pensión digna. En este sentido, este sistema es intergeneracional porque las diferentes generaciones contribuyen para que las personas que ya deben retirarse puedan tener

una pensión sostenida a lo largo de su vida. Finalmente, se dice que es de beneficios definidos porque se encuentra establecido el monto de la pensión, dependiendo del salario y los años de servicio. Anteriormente, existían tablas que indicaban que si un trabajador se jubilaba tras 15 años de servicio y cierta edad recibiría un porcentaje de su salario, avanzando gradualmente hasta considerar a los trabajadores que se jubilaban con 30 años de servicio, 60 años de edad y con el 100 % de su salario.

Con ese mecanismo, todos sabían con cuánto se retirarían dependiendo de sus años de servicio y edad.

Estas pensiones solidarias y de beneficios definidos eran manejadas por las instituciones



DIGNIDAD PARA LXS TRABAJADORXS

públicas, hasta el año de 1997, cuando en el marco de la política neoliberal (según la cual todo lo resuelve el mercado y por eso hay que disminuir la participación del Estado en los asuntos públicos) se concibió que los derechos también debían ser manejados por el mercado. Según esta lógica, pronto comenzaron a implementarse un conjunto de experimentos sociales con el retiro de los trabajadores, primero en Chile, en 1981, y después en el resto del continente. Gracias a esto, en México se creó un sistema que pasó a estar bajo la administración del mercado y los intereses privados, denominado Administradoras de Fondos para el Retiro, es decir, las Afores, mismas que fueron propuestas por las dos fuerzas políticas más importantes de entonces, el PRI y el PAN, pues fueron sus legisladores quienes aprobaron este cambio que atentaba claramente contra el futuro de la clase trabajadora.

La reforma de 1997 cambió nuestro sistema solidario por un sistema de mercado manejado a través de las administradoras de fondos, lo que implicó que, tras su aprobación, de la noche a la mañana los ahorros de los trabajadores pasaron a ser manejados por el sector financiero a través de administradoras privadas. En su momento, ni actores políticos del conservadurismo ni comunicadores se atrevieron a decir que estaban «expropiando a los trabajadores», que «estaban siendo despojados de sus ahorros». Hubo un silencio cómplice. Y a ello se debe, en gran medida, que desde entonces muchos trabajadores no supieron a qué fondos habían ido a parar sus ahorros, de modo que todas las contribuciones que hicieron para pensionarse quedaron en un limbo sin que nadie pudiera reclamarlas.

El neoliberalismo cambió radicalmente la manera de administrar las pensiones en México, especialmente aquellas manejadas por el IMSS. El sis-

tema solidario, intergeneracional y de beneficios quedó a merced del sistema financiero, y los beneficios definidos se diluyeron para darle prioridad a las contribuciones definidas, es decir, lo único que el trabajador tenía claro era la cantidad, el porcentaje que debía aportar al ahorro de manera individual, pero se olvidó el espíritu colectivo que caracterizaba a los sistemas solidarios. El impulso individualista del neoliberalismo se apoderó también de las pensiones, redujo todo a la capacidad de ahorro individual; por eso la insistencia publicitaria, durante los últimos cuarenta años, de que sean los trabajadores quienes, si pueden, ingresen directamente dinero a sus Afores.

Para implementar este nuevo sistema se promovió con insistencia la idea de que el gobierno era ineficaz, que no manejaba correctamente los fondos y que existía mucha corrupción. En contraparte, se sostenía que con la administración al mando del sector financiero (a cuyos miembros se promovía como auténticos expertos en inversión) habría mucha eficiencia y rendimientos, de modo que el trabajador vería crecer rápidamente sus aportes para el retiro. Todo sería ganancias; excepto, claro, el monto que el trabajador tendría que pagar a la Afore, como una compensación por el trabajo de administrar sus recursos. Un pago que no existía en los sistemas solidarios, pues su servicio era parte de la responsabilidad del Estado, y que en el nuevo sistema se convirtió en un requisito indispensable a costa del bolsillo de los trabajadores, obligados a pagar una comisión a un sistema de administración que no pidieron, pero que les prometía grandes tasas de reemplazo, es decir, un buen porcentaje de jubilación en relación al sueldo, que podía ser incluso mayor si el trabajador ahorra mucho y si el sector financiero realizaba buenas inversiones con un dinero que no era suyo.

Contrario a lo prometido, el sistema de pensiones impulsado con la ley de 1997 fue un rotundo fracaso en México y en muchos otros países. Con la destrucción del sistema solidario, se creó un sistema individualizado completamente ineficaz que hizo reducir las tasas de reemplazo a márgenes del 45 y hasta del 30 %. Es por eso que en Bolivia y Chile el movimiento popular convirtió al sistema de pensiones en una de sus grandes reivindicaciones sociales, hartos de las consecuencias que habían traído las administradoras de fondos.

La experiencia mexicana, por su parte, puso en evidencia los abusos y la falta de control real de las Afores. Primero, la comisión que las administradoras comenzaron a cobrar a los trabajadores resultó ser incluso mayor que la que cobraban las administradoras de fondos en Estados Unidos; llegaron a cobrar hasta 1.2 %. Por otro lado, los trabajadores que sí recibieron notificación del cambio de su estrategia de ahorro y recibieron sus estados de cuenta pronto notaron la falta de consistencia de las nuevas administradoras: un mes tenían una cierta cantidad de ahorro, pero al próximo la cifra era menor y la administradora lo reportaba como minusvalía por una mala situación de las inversiones. Poco importaba si el trabajador aportaba para su retiro de manera constante, pues la lógica inversionista terminaba por beneficiar sólo a los dueños de las diez Afores existentes. Era un negocio redondo: los financieros dueños de las administradoras de fondos manejan la cuenta individual del trabajador; si al invertir el recurso hay ganancias, éstas se distribuyen entre el financiero y el trabajador; si hay pérdidas, sólo el trabajador las asume.

En el sistema solidario también se invierten los recursos, pues el objetivo no es dejar los recursos guardados, inactivos bajo un escritorio. Sin embargo, los ahorros para pensiones se invierten

según un criterio de impulso al desarrollo del país, mientras en las Afores los criterios de inversión han sido siempre laxos y opacos, pues los trabajadores ignoran completamente en dónde son usados sus recursos y para beneficio de quién. Habrá quien, por ejemplo, sin saberlo tenga sus recursos invertidos en empresas privadas de electricidad, atentando contra la soberanía eléctrica del país, pero obligado por el juicio de los financieros que invierten el recurso en donde consideran que hay mayor rentabilidad. Afortunadamen-



te, con el primer gobierno de la 4T se implementaron mecanismos de control con el fin de dotar al trabajador de herramientas que le permitan definir en dónde invertir sus recursos.

Es imprescindible explicar a la ciudadanía que México, durante décadas, tuvo un sistema solidario de pensiones, que en 1997 los grupos conservadores sustituyeron por un sistema privatizador, antipopular y contrario a los intereses de los trabajadores. Lo mismo ocurrió, en 2007, con el fondo solidario del ISSSTE, ahora a manos del gobierno panista de Felipe Calderón, quien implementó una reforma que en esencia es idéntica a la impulsada por el gobierno de Ernesto Zedillo, en 1997. Ambas legislaciones buscaron apuntalar un sistema de pensiones según los preceptos del modelo económico neoliberal.

En el imaginario colectivo, promovido por la ideología individualista de los neoliberales, se difundió la idea de que al-

canzar la jubilación es muy difícil. Sobre todo entre los jóvenes, hay muchas personas que no creen que algún día llegarán a jubilarse; y en buena medida tienen razón, porque no todos los sistemas de trabajo establecen la contribución a la seguridad social. En México, los sistemas de seguridad social, incluyendo las cuentas individuales, están dirigidos a quienes tienen un empleo formal; sin embargo, más del 50 % de la población no tiene empleo formal y, por lo tanto, no contribuye a la seguridad social, lo que implica que dependerán de sus propios medios cuando sean mayores. Éste es uno de los principales motivos para la pensión universal para adultos mayores impulsada por López Obrador, pues se torna crucial cuando entendemos que la gran mayoría de las personas no tendrán acceso a una pensión contributiva.

¿Qué hacer entonces ante el problema de los trabajadores con empleo formal, que eran derechohabientes del IMSS y del ISSSTE y que pasaron a cuentas individuales en 1997 y 2007, respectivamente? ¿Cómo evitar el empobrecimiento de las personas que han dedicado más de 30 años de su vida a un trabajo formal para engrandecer a la nación?

La solución es establecer un fondo solidario que cubra la diferencia entre el salario que venían ganando y la pensión que recibirán¹. Por ejemplo, supongamos que una persona tenía un salario base de cotización de 10,000 pesos en su último año de trabajo y, al jubilarse, se le informa que su pensión será de 4,500 pesos. Esta persona enfrentará una drástica reducción de ingresos, pasando a una situación económica muy precaria.

Para evitar esto, se propuso la creación del Fondo de Pensiones para el Bienestar, el cual complementará la pensión hasta alcanzar el salario base de cotización previo a la jubilación, con un tope de 16,777 pesos (que es el salario promedio registrado en el IMSS), en 2024, pero que se ajustará anualmente. Por otro lado, esto significa que una persona que tiene cuentas individuales y que por su nivel salarial (o porque ahorró adicionalmente) alcanza una pensión de 20,000 pesos, se llevará su dinero y ahí ya no aplicará el fondo, pues no hay nada que complementar.

¹ Cuando hablo de «lo que venían ganando», hablo del salario base de cotización, pues esto es lo que se usa para calcular la pensión. Existen otras prestaciones, pero no se cotiza sobre ellas para la seguridad social, sólo sobre el salario base.

El fondo se financiará con diversas fuentes. Una de ellas es el 75 % de los recursos manejados por el Instituto para Devolver al Pueblo lo Robado, que provienen de decomisos por actividades ilícitas. También se consideran los recursos adeudados por entidades federativas al ISSSTE y al IMSS, como los 10,000 millones de pesos que debe el gobierno de Veracruz. Además, se contempla un porcentaje de las ganancias de empresas estatales y los recursos de cuentas inactivas manejadas por las administradoras de fondos. Estas cuentas inactivas, que no han sido reclamadas en al menos 10 años (en el caso del IMSS) o 15 años (en el caso del ISSSTE), se transferirán al fondo garantizando que los derechos de los titulares o sus beneficiarios sean imprescriptibles y puedan reclamar los fondos en cualquier momento.

Es importante informar a la gente para que sepa que puede verificar si tiene una cuenta inactiva. Para ello, pueden visitar la página del Sistema de Ahorro para el Retiro con su CURP y reclamar esos recursos. De igual manera, si alguien descubre que un familiar ya fallecido tenía una cuenta inactiva, también puede reclamar esos fondos. Este proceso garantiza que los recursos sirvan para un bien social sin perder los derechos de los legítimos propietarios, ya que puede ser que el trabajador haya fallecido y sus familiares nunca supieron que tenía una cuenta o nunca los registraron como beneficiarios.

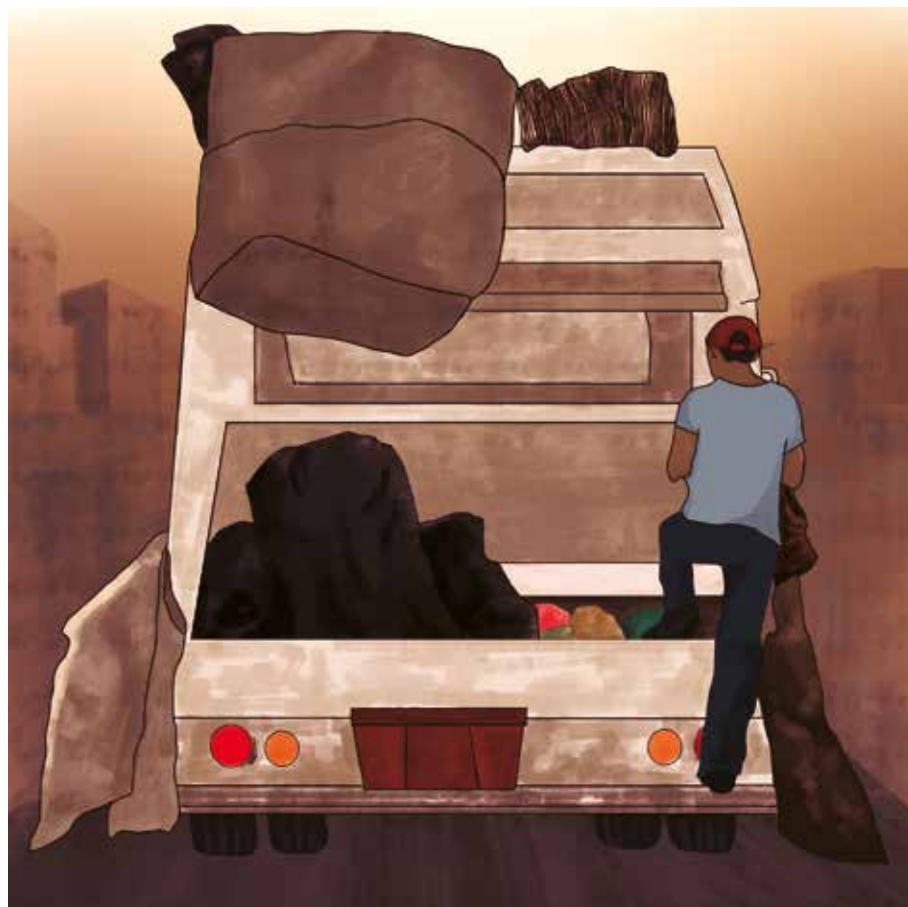
Cabe recordar que desde 2020 se aprobó una reforma para que las administradoras de fondos devolvieran estos recursos al IMSS o al ISSSTE, pero no lo han hecho. Y hay que recordar, también, que de las administradoras de fondos la que más recursos debe es la Afore Azteca, que pertenece al Grupo Salinas de Ricardo Salinas Pliego, acostumbrado a no pagar impuestos y a apropiarse de recursos ajenos. Desde hace años

que todas las administradoras debían devolver los fondos, así que ante su negativa ahora serán transferidos al Fondo de Pensiones para el Bienestar, garantizando la imprescriptibilidad del derecho a esos fondos. Es decir, si una persona dentro de tres o cuatro años descubre que su papá o mamá fallecida tenía una cuenta inactiva, podrá reclamar esos ahorros con intereses incluidos. Con esta medida, las cuentas inactivas que hasta entonces beneficiaron a un puñado de inversores privados, pasarán a tener un fin social y solidario, lo que permitirá que las personas se jubilen de una mejor manera.

La creación de este fondo es parte de la lucha por la defensa de las pensiones solidarias, una lucha histórica de la izquierda. Los trabajadores y trabajadoras han luchado durante años por alcanzar justicia, muchas veces a pesar de los

convenios que sus líderes sindicales firmaron con los gobiernos neoliberales, a favor de convertir estos fondos solidarios en fondos de pensiones individuales. Desde los años 90 surgió un movimiento de resistencia contra esta arbitrariedad. En 2007, durante la reforma para el sector público, Andrés Manuel López Obrador estuvo involucrado en la lucha, al igual que en 1995. Entonces se logró que muchos trabajadores optaran por el décimo transitorio, que les daba mejores beneficios en un sistema solidario.

Hemos luchado siempre por mejores condiciones de trabajo y pensiones; por eso, en este gobierno, hemos impulsado tres acciones importantes en esta materia. La primera fue la pensión universal para adultos mayores, que se convirtió en derecho en el artículo cuarto constitucional. La segunda fue un paquete de reformas presentadas en 2020,





que incluyó la disminución de semanas de cotización para derechohabientes del IMSS, la reducción de comisiones de las Afores y un acuerdo con el sector empresarial para incrementar la aportación patronal. La tercera es la creación del Fondo de Pensiones para el Bienestar, para que las personas que quieran jubilarse puedan hacerlo con el 100 % de su salario de cotización hasta el tope máximo del salario promedio registrado en el IMSS.

Los diputados y senadores que critican estas reformas, así como distintos personajes de la llamada sociedad civil, deberían informarse mejor, pues esta legislación no es improvisada. Por eso, los que defienden al sector financiero sin conocer el contenido de la legislación, no entienden que estamos haciendo justicia social y laboral.

Desde 1997, nuestro movimiento luchó por pensiones dignas. Hemos resistido las arbitrariedades contra la clase trabajadora y nuestra postura ha sido siempre en favor de la justicia social. Incrementar el salario es parte de esta lucha, pero también lo es el establecimiento de sistemas justos para el retiro. Por eso es fundamental defender esta reforma, explicando claramente que no es para los que ya se jubilaron o están en el décimo transitorio, sino para los que cotizaron al IMSS y al ISSSTE y están en cuentas individuales.

Además, hay que recordar que en la iniciativa de reformas también se establece que las personas trabajadoras independientes puedan cotizar al IMSS de manera más accesible y con derecho a los cinco seguros. Esta reforma implica declarar los ingresos con base en la buena fe y permite pagar la cuota de contribución de manera mensual, bimestral, trimestral, semestral o anual, que facilita la inscripción voluntaria y contribución a la seguridad social. Antes de esta ley, quienes querían inscribirse de manera voluntaria, principalmente por el seguro de enfermedades y maternidad, tenían que pagar una anualidad, lo cual no siempre era posible. Hoy se puede pagar de manera mensual, lo que facilita la contribución a la seguridad social, pensando en el futuro y en el presente. Esto permite estar cubiertos y tener derecho al seguro de guarderías del IMSS, a la atención médica, a los medicamentos, entre otros beneficios.

Es fundamental contribuir a la seguridad social. Por eso debemos convocar a todas las personas trabajadoras independientes a que se acerquen al IMSS para inscribirse, que miren su presente y su futuro, no a través de las Afores, sino a través de las instituciones de seguridad social. En estos tiempos de transformación, es muy importante que reconozcamos el papel que han desempeñado estas instituciones y fortalezcamos el estado de bienestar en beneficio de todos y todas.

Labores excéntricas

EL LUGAR DEL TRABAJO DOMÉSTICO Y CAMPESINO EN LA ACUMULACIÓN DEL CAPITAL¹

Armando Bartra

Cuando las feministas empezamos a descubrir y a analizar la función del trabajo doméstico en el proceso de acumulación capitalista, algunas de nosotras señalamos la similitud estructural existente entre las relaciones de producción del ama de casa occidental y las de los campesinos pobres... Las relaciones de producción de ambos grupos suelen ser consideradas como externas al capitalismo, [pero] constituyen la base oculta y no remunerada de una prolongada reproducción del capital.

MARÍA MIES

En el vasto mundo del trabajo, los asalariados son legión: más de tres mil trescientos millones de una población total de ocho mil millones. Pero hay dos mil quinientos millones de campesinos que con los mil doscientos millones de personas que laboran por cuenta propia rebasan con mucho a los que cobran un sueldo. Y si consideramos a los tres mil millones de mujeres, niñas, jóvenes y adultas que desempeñan de manera no remunerada el setenta por ciento de los cuidados del hogar sin que esta carga se reduzca por el hecho de que un millón doscientos mil de ellas también se encuentran insertas en el mercado de trabajo, tendremos que admitir que más de dos terceras partes del esfuerzo laboral del mundo corre por cuenta de «amas de casa», campesinos y cuentapropistas, es decir, no asalariados. El problema con esto es que, para Adam Smith, David Ricardo, Karl Marx y otros clásicos de la economía po-

¹ Ésta es una versión resumida del trabajo del autor, el cual se puede encontrar de manera íntegra en un libro de reciente publicación que lleva el mismo nombre, publicado por Escuela de Cuadros, Utopix y Para Leer en Libertad.

lítica que encuentran en el trabajo el origen del valor y en la plusvalía la clave de la acumulación de capital, únicamente el trabajo asalariado puede considerarse productivo mientras que el resto es quizá socialmente útil pero económicamente nulo. ¿Será?

La pregunta puede parecer irrelevante cuando en el ámbito de las ciencias sociales y en el discurso político encontramos abundantes y severos cuestionamientos de la modernidad capitalista, muchos de los cuales se ocupan de los males que aquejan a las mujeres, los campesinos y otros trabajadores.

¿Por qué entonces regresar a autores como Marx, que escribieron hace más de siglo y medio y sobre un capitalismo muy distinto al que tenemos ahora?

Quizá porque algunos de quienes se enfrentaban al capitalismo naciente sintieron la imperiosa necesidad de adentrarse en las entrañas económicas del sistema, develar el nexo estructural que articula la pobreza con la riqueza para, a partir de esto, hacer la crítica radical de un orden que apenas se estaba imponiendo: un mercantilismo absoluto cuyas claves había que buscar precisamente en la producción y la distribución. Hoy tenemos diagnósticos rigurosos que develan y

denuncian el carácter clasista, racista, patriarcal, adultocéntrico y ecocida del capitalismo; sin embargo, nos interrogamos poco sobre el origen del mal, sobre su nuez, su núcleo duro. Si el apotegma de Proudhon «la propiedad es un robo», nos deja insatisfechos, cuál es el truco, cuál es la maña del capital para embarnecer sin medida ni clemencia. Porque cuestionar, repudiar, denunciar las lacras del sistema es distinto de hacer su crítica. Cuando menos, desde que Immanuel Kant empleó ese término en los títulos de sus tres libros mayores, sabemos que hacer la crítica no es señalar las fallas de algo o los males que ocasiona, sino buscar su fun-

damento, descubrir su clave. Y esto es lo que se propusieron los padres de la economía política, esto es lo que hizo Marx en *El capital*, cuyo subtítulo es precisamente *Crítica de la economía política*. Sigamos, pues, haciendo diagnósticos airados del mal social, pero no estaría de más que, de vez en cuando, nos interrogáramos sobre su origen. Creo que la cuestión del omnipresente y cuantioso trabajo no asalariado y su presunta explotación por el capital lo ameritan.

El concepto de explotación es hoy menos frecuentado que cuando el marxismo era el sistema de pensamiento domi-

nante en las izquierdas. Ahora hablamos de desigualdad y la documentamos sin preguntarnos demasiado por el núcleo duro de los mecanismos económicos que la originan, pero aun así es chocante y contraintuitivo suponer que el constatable, omnipresente y con frecuencia agotador esfuerzo laboral de quienes no perciben un salario es ajeno a la acumulación de capital. Es difícil aceptar que ese interminable y multiforme trajín no interviene en la creación de la riqueza económica. Si ensamblas autos eléctricos en una armadora de Tesla, sabes que con tu trabajo haces más rico a Elon Musk; pero si eres una niña de ocho años que va por agua al pozo, trae leña y cuida a su

hermanito de dos, ¿a quién le estás llenando el bolsillo? ¿Eso no importa?

Que producen cosas útiles nadie lo pone en duda: de los no asalariados provienen bienes y servicios indispensables para la reproducción social, imprescindibles para la vida, pero los fundadores de la ciencia económica que desentrañaron los misterios del capitalismo naciente los excluyen unánimemente del «trabajo productivo», que reservan en exclusiva para el desempeño proletario. La cuestión es ¿por qué? Y según cual sea nuestra respuesta habrá que enmendarles la plana a los clásicos.



«SÓLO ES PRODUCTIVO EL TRABAJO ASALARIADO QUE PRODUCE CAPITAL»

Una buena manera de responder a la pregunta es releer la sección titulada «El trabajo productivo y el trabajo improductivo», que forma parte de las notas preparatorias que tomaba Marx para su obra magna *El capital* y que conocemos como «Historia crítica de la teoría de la plusvalía». El texto fue escrito entre 1862 y 1863 y en él Marx dialoga con los economistas de su época, particularmente con los que encontraban en el trabajo la fuente del valor económico y en la relación asalariada la clave de la acumulación, coincidiendo con ellos en que el único trabajo productivo es el remunerado que produce mercancías.

Desde el arranque de las notas, Marx dice que seguirá las ideas «correctas» de Adam Smith y su postura queda clara ya en el primer párrafo:

El trabajo productivo en su significado para la producción capitalista es trabajo asalariado que, cambiado por la parte variable del capital (la parte del capital que se destina a salarios), reproduce no sólo dicha porción de capital (o el valor de su propia fuerza de trabajo), sino que además produce la plusvalía para el capitalista. Sólo de esta manera la mercancía o el dinero se convierten en capital, se producen como capital. Sólo es productivo el trabajo asalariado que produce capital².

Según Marx (que en esto como en otras cosas concuerda con el autor de *La riqueza de las naciones*), es trabajo productivo el que compra y emplea un capital para valorizarse. En cambio, es trabajo improductivo aquel que presta exclusivamente servicios de carácter personal y se retribuye con fondos destinados al consumo final.

Resulta claro que en la misma medida en que el capital subyuga el conjunto de la producción —es decir, que todas las mercancías se producen para el mercado y no para el consumo inmediato y que la productividad del trabajo se eleva en la misma medida— también se desarrollan cada vez más diferencias materiales entre los trabajadores productivos e improductivos, ya que los primeros [...] producirán con exclusividad mercancías, en tanto que los segundos [...] sólo ejecutarán servicios personales³.

Hay que tener presente que Marx está hablando del «trabajo productivo» como concepto de la «producción capitalista», un orden económico alrevesado donde lo que cuenta son los valores de cambio y no los valores de uso. Esto queda aún más claro cuando sostiene que la separación creciente entre el «trabajo productivo» y el «improductivo» ocurre precisamente «cuando el capital domina el conjunto de la producción». Y si el capital aún no domina el conjunto pronto lo dominará, piensa Marx, pues la transformación de todo el trabajo productivo en trabajo asalariado es una premisa del capitalismo de la que hay que partir. Sus notas no dejan lugar a dudas: en un mundo en que se han impuesto «las relaciones esenciales de la producción capitalista [...] todas las esferas de la producción material [le] están —formal o realmente— subordinadas, todos los trabajadores [...] son asalariados y los medios de producción en todas las esferas los enfrentan como capital». Concluye: «Esto es lo que ocurre de manera cada vez más total, ya que es la meta principal, expresa el límite del proceso [y es] cada vez más una representación exacta de la realidad»⁴.

El futuro autor de *El capital* ha puesto al descubierto la compulsión primaria del gran dinero y con ello la tendencia económicamente irrefrenable de un proceso que le parece fatal, pues no encuentra en él factores inmanentes que pudieran contrarrestarlo o siquiera desviarlo. Pero sucede que la lógica reproductiva de la sociedad y la naturaleza, factores externos de los que el capital no puede prescindir y a los que no puede sustituir, obstaculizaron y obstaculizan esta tendencia. La subsunción ocurre, pero ni su forma económica ni su contenido material son los canónicos. Lo que encontramos en la esfera doméstica y en la campesina es una subsunción oblicua en que las mediaciones entre trabajo y capital, sin dejar de ser férreas, son distintas a las que operan con los asalariados.

En ese momento Marx no puede verlo, ya que lo que el futuro autor de *El capital* tiene presente al distinguir lo «productivo» de lo «improductivo» es la violenta y arrasadora expansión del capital industrial que se venía desarrollando desde el siglo XVIII sobre los diversos trabajos por cuenta propia: de los campesinos, artesanos, amas de casa y otros prestadores de servicios. Por esos años la creciente proletarización del trabajo era no sólo un hecho, sino también una tendencia que parecía irrefrenable, de modo que cuando Marx sostiene que las labores no asalariadas son económicamente improductivas, es decir, irrelevantes para el sistema, está pensando en que constituyen una porción del trabajo decreciente y tendencialmente residual.

En el texto que nos ocupa, los ejemplos que Marx pone como labores económicamente improductivas son en todos

² Karl Marx, *Teorías sobre la plusvalía*, tomo I, Editorial Cartago, Buenos Aires, 1974, p. 129

³ *ibid.*, p. 136

⁴ *ibid.*, p. 346

los casos trabajos domésticos: limpieza del hogar, preparación de los alimentos, arreglos de la ropa, composturas de los muebles, producción de bienes y servicios de consumo final que cuando se retribuyen —y en los ejemplos de Marx son siempre pagados— la erogación no viene de un capital, sino de los ingresos de los que el contratante dispone para su subsistencia.

Estos quehaceres: trapear, lavar trastos, guisar, coser, arreglar la casa, son los que por lo general hacían —y hacen— las mujeres. De modo que no hay que forzar demasiado sus dichos para llegar a la conclusión de que a mediados del siglo XIX Marx considera improductivo el trabajo doméstico femenino. ¿Esto significa que para él media humanidad era laboralmente irrelevante? De ninguna manera. Para Marx el trabajo femenino era tan importante y productivo como el masculino asalariado, pero lo era únicamente en la medida en que un número cada vez mayor de mujeres se desempeñaban como obreras.

LA FAMILIA DE LA SOCIEDAD CAPITALISTA ES DISUELTA

Marx lo sabía bien, pues por esos años vivía en Londres, el corazón del mundo industrial, y era amigo de Friedrich Engels, quien en 1845 había publicado un estudio sobre *La situación de la clase obrera en Inglaterra*, donde se documenta la creciente incorporación de las mujeres y los niños en el trabajo fabril, proletarización femenina propiciada por los empresarios, pues de este modo podían reducir aún más los salarios. Escribe Engels: «En la familia en que todos trabajan, el individuo tiene necesidad de ganar mucho menos y la burguesía ha aprovechado la coyuntura para rebajar brutalmente el salario, con la ocupación y explotación de mujeres y niños»⁵, versión que confirma H. Mayhew en el libro publicado en 1862, titulado *London Labor and London Poor*, donde se refiere al «gran número de mujeres y niños que trabajan en los diferentes oficios manuales con el fin de reducir los salarios de los hombres»⁶.

En las metrópolis industriales el capitalismo estaba desmantelando la familia tradicional y erosionando el trabajo doméstico proverbialmente femenino en la medida en que las mujeres se incorporaban cada vez más al trabajo fabril. «La ocupación de la mujer en la fábrica disuelve por fuerza completamente a la familia, y tal disolución tiene en la actual condición de la sociedad —condición que reposa en la familia— las consecuencias más desmoralizadoras»⁷, escribe Engels, y más

adelante habla del «total enterramiento de la familia obrera»⁸ y ratifica: «La familia de la sociedad capitalista es disuelta»⁹.

A veces sucede que son las esposas asalariadas quienes sostienen al marido y los hijos, lo que a Engels le parece aberrante: «Son estas condiciones las que castran al hombre y roban a la mujer su feminidad, sin que esté en su poder el dar al hombre una real feminidad ni a la mujer una real masculinidad, [son] condiciones que degradan a los dos sexos y con ellos a la humanidad»¹⁰.

Pese a que le parece que «el originario dominio del hombre sobre la mujer debe ser inhumano»¹¹, lo que Engels reclama cuando menos en ese momento es el regreso de las mujeres a los trabajos domésticos. Y al respecto cita un informe de Hawkins, comisario de Lancashire: «Las muchachas [...] no tienen el medio ni el tiempo ni la ocasión de aprender los más comunes deberes de la vida doméstica [...]. La madre está lejos del niño más de doce horas al día. [Se] puede por esas y otras razones, especialmente por amor a la vida de los niños, desear solamente y esperar que pueda venir el tiempo en que las mujeres casadas sean excluidas de las fábricas»¹².

QUE PUEDA VENIR EL TIEMPO EN QUE LAS MUJERES CASADAS SEAN EXCLUIDAS DE LAS FÁBRICAS

Y lo fueron. Conforme embarnece el régimen industrial capitalista las mujeres comenzaron a regresar a sus hogares y en las fábricas ya no se vieron niños obreros de cinco o seis años ni madres trabajando y amamantando. Pero no fue «por amor a la vida», sino porque la sobreexplotación estaba acabando con la clase obrera y poniendo en riesgo la creciente provisión de trabajadores que demandaba la expansión de la industria. «No dudamos en afirmar que los sufrimientos de las clases trabajadoras, y por consiguiente la tasa de mortalidad, son mayores ahora que en tiempos anteriores. Ciertamente en la mayoría de los distritos fabriles la tasa de mortalidad [...] es pura y simplemente aterradora [...]. La realidad es que la clase más numerosa puede haberse estancado e incluso sufrir un proceso de deterioro»¹³, escribía preocupado el encuestador G. C. Holland, en el libro de 1843 titulado *The Vital Statistics of*

⁸ *ibid.*, p. 149

⁹ *ibid.*, p. 151

¹⁰ *ibid.*, p. 150

¹¹ *ibid.*, p. 151

¹² *ibid.*, p. 152

¹³ Thompson, *op. cit.*, p. 213

⁵ Federico Engels, *La situación de la clase obrera en Inglaterra*, Editorial Futuro, Buenos Aires, 1965, p. 91

⁶ Citado en E. P. Thompson, *La formación histórica de la clase obrera. Inglaterra: 1780-1832*, Laya, Barcelona, 1977, p. 97

⁷ Engels, *op. cit.*, p. 148

Sheffield. De ahí que, en vez de la proletarización universal sin distinción de sexos que pronosticaba Marx —y que alarmaba a Engels porque «disolvía a la familia obrera»—, lo que en realidad se impuso fue una división del trabajo: los hombres a la fábrica y las mujeres al hogar, ellos a la «producción» y ellas a la «reproducción».

Las funciones proverbialmente femeninas, engendrar hijos y atender el cúmulo de labores domésticas, «fueron directamente puestas al servicio de la acumulación capitalista», escribe Silvia Federici en *Caliban y la bruja*. «El cuerpo femenino —continúa— fue transformado en instrumento para la reproducción del trabajo y la expansión de la fuerza de trabajo [...], aspecto de la acumulación originaria que está au-

sente en el análisis de Marx»¹⁴. Así, enclaustradas en la domesticidad, atrapadas en el hogar proletario, las mujeres padecieron también la desvalorización de labores que en el mundo artesano y campesino eran reconocidas y estimadas. Porque si bien en el viejo orden los trabajos masculinos y las labores femeninas tenían distinta relevancia social, se entendía que unos y otras contribuían al sostenimiento de la familia; en cambio, en el mundo de los valores de cambio, sólo el trabajo asalariado que produce mercancías y alimenta al capital es visto como productivo, mientras los otros esfuerzos no son trabajos sino simple quehacer, quizá necesario, pero puramente reproductivo.

Los trabajos llamados reproductivos hacen que se mueva el mundo y son cuantiosos, pero para el pensador que más aportó a la reivindicación del trabajo y de los trabajadores se trata de labores económicamente improductivas. Lo que significa que no participan en los procesos de valorización y acumulación de capital, es decir, que no producen plusvalía y quienes los desempeñan quizá consumen en ellas todas sus energías y talentos, pero no son explotados.

Marx podía, sin ruborizarse, calificar a los trabajos y servicios domésticos de improductivos porque le parecían meneguantes y residuales. Sin embargo, no se le escapaba que en muchos casos los bienes que producen son idénticos a otros que elaboran trabajadores asalariados, que sí cobran la forma de mercancías y que son productivos, pues reportan plusvalía a los patrones.

Aunque el capital haya conquistado la producción material, y por tanto, en general, haya desaparecido la industria doméstica [...] que crea valores de uso en forma directa, para el consumidor [es claro que] la costurera a quien hago venir a mi casa a coser camisas, o los obreros que reparan muebles, o la criada que frota y limpia la casa, o el cocinero que da a la carne y otras cosas su forma comestible, fijan su trabajo en una cosa y en realidad aumentan el valor de dicha cosa, tal como la costurera que cose en una fábrica, el mecánico que repara una máquina, los trabajadores que la limpian o el cocinero que cocina en un hotel como asalariado de un capitalista. [Así que] en potencia estos valores de uso son mercancías, [...] en potencia [...] estas personas también han producido mercancías y agregado valor a los objetos que trabajaron. Pero se trata de una muy pequeña categoría entre los trabajadores improductivos¹⁵.



¹⁴ Silvia Federici, *Caliban y la bruja. Mujeres, cuerpo y acumulación originaria*, Pez en el Árbol, México, 2013, p. 159-160

¹⁵ Marx, *op. cit.*, p. 39

Coser, limpiar, arreglar la casa, cocinar son trabajos iguales a los que otros asalariados no domésticos producen en forma de mercancías que al venderse generan ganancias. Si compro ropa de fábrica sé que en el precio van las utilidades del empresario; si como en un restaurante sé que en la cuenta va la ganancia del restaurantero; si llevo mi ropa sucia a la lavandería sé que en mi pago va el beneficio que corresponde al dueño del establecimiento. Pero cabe preguntarse: si la costura, la comida y el lavado son labores hechas en casa por una empleada a la que le pago o por algún miembro de la familia que no cobra, pero cuya subsistencia es parte de los gastos del hogar, ¿hay valor y quizá plusvalor en estos bienes y servicios? Y si los hay, ¿adónde van a parar? Si trabajo en una fábrica de ropa, en una lavandería, en un restaurante, sé que el patrón vive a mis costillas. Si hago exactamente los mismos trabajos, pero para mi marido y mis hijos, ¿también me explotan? ¿Quién? ¿Cómo?

El que en el «enorme arsenal de mercancías» que es la sociedad capitalista haya algunas que siendo idénticas a las otras son sólo «potenciales» (pues las producen trabajadores «improductivos»), no inquiere demasiado a Marx, pues afirma que «se trata de una muy pequeña categoría». Pero a nosotros sí nos importa y mucho, porque en realidad se trata de lo que hacen dos terceras partes de la población mundial, lo que incluye a casi todas las mujeres y a los campesinos.

EL AMA DE CASA Y SU TRABAJO NO SE SITUAN FUERA DEL PROCESO DE PRODUCCIÓN DE PLUSVALÍA

En 1972, una feminista de nombre Mariarosa Dalla Costa publicó el libro *El poder de las mujeres y la subversión de la comunidad*, donde sostiene que «el salario controlaba una cantidad de

trabajo mayor que la que aparecía en el convenio de fábrica», pues incluía el trabajo doméstico de las mujeres que no sólo producía valor de uso, sino también valor de cambio, pero que «aparecía como un servicio personal, fuera del capital»¹⁶. Años después, otra feminista, María Mies, resumió así la propuesta de Mariarosa: «El ama de casa y su trabajo no se sitúan fuera del proceso de producción de plusvalía, sino que constituyen el cimiento básico sobre el que da comienzo este proceso de producción»¹⁷.

Las feministas cercanas al marxismo que no querían renunciar a la crítica del capitalismo formulada por Marx le enmiendan, sin embargo, la plana al autor de *El capital* en un tema vital: la explotación del trabajo doméstico que ellas ven como trabajo económicamente productivo.

Pero no basta postularlo, es necesario esclarecer la dinámica económica subyacente que para Dalla Costa y quienes en ese momento la siguen es muy simple: «Lo que el ama de casa produce dentro de la familia no es tan sólo valor de uso, sino la mercancía “fuerza de trabajo”

que el marido puede vender posteriormente como trabajador asalariado»¹⁸. La consecuencia práctica de esto es el surgimiento de luchas por su remuneración, como el Movimiento por un Salario para el Trabajo Doméstico que en los años setenta cobró fuerza en Estados Unidos¹⁹.

El hecho de que el trabajo doméstico, mayormente femenino, sea reconocido como trabajo y en consecuencia sea asumido

¹⁶ Mariarosa Dalla Costa y Selma James, *El poder de la mujer y la subversión de la comunidad*, Siglo XXI Editores, México, 1975, p. 32

¹⁷ María Mies, *Patriarcado y acumulación a escala mundial*, Traficantes de Sueños, Madrid, 2019, p. 84

¹⁸ *ibid.*

¹⁹ Ver Silvia Federici, *Revolución en punto cero. Trabajo doméstico, reproducción y luchas feministas*, Mapas, Madrid, 2013, p. 71-90



y retribuido por el Estado a través de servicios y gasto público, es una demanda legítima. Pero el problema conceptual subsiste, pues la fuerza de trabajo no se «produce» como mercancía, sino que las personas son forzadas a «transformar» en mercancía sus energías y talentos vueltos fuerza de trabajo, porque expropiadas de sus medios de producción no pueden ejercerla por cuenta propia. La reproducción de los seres humanos no es una producción fabril, no es un proceso capitalista; en las usinas se fabrican zapatos, automóviles, celulares, no personas.

La generación y regeneración de los seres humanos —un proceso social complejo y sutil en que se combinan además de la biología múltiples quehaceres, saberes y afectos— es como el milagro de la vida, un misterio insondable para el capital, un agujero negro en la economía, un lugar donde no rigen las leyes del mercado. Los humanos somos los únicos seres capaces de ir mas allá de nosotros mismos, los únicos capaces de gestar un *plus* de ser cuyo efecto económico es la plusvalía. El fondo de la plusvalía es metafísico y el capital se la embolsa, pero no puede explicarla.

En el capitalismo las familias son patriarcales, por lo general el marido oprime a la mujer y se desvalorizan los quehaceres femeninos, pero aun así los grupos domésticos no son fábricas donde se produce mano de obra con trabajo mujeril impago, lo que no nos exime de explicar cómo es que el trabajo de las mujeres que ahí se realiza produce plusvalía y cómo ésta fluye hasta el capital y sirve a la acumulación. La respuesta a este enigma la encontramos en Marx: el trabajo doméstico no produce fuerza de trabajo porque ésta no puede ser producida en el sentido capitalista del término, pero sí produce bienes y servicios del todo semejantes a los que se fabrican en las empresas capitalistas. Bienes y servicios que, con otros que también consume la familia y son plenamente mercantiles, definen el precio de la fuerza de trabajo, es decir, el monto que el capitalista debe pagar para que ésta pueda reproducirse.

Del salario obrero viven bien que mal todos los miembros de la familia, de modo que directa o indirectamente los bienes y servicios domésticos se «pagan». Pero su «precio» es menor del que tendrían en el mercado, pues los que se compran en las tiendas contienen la ganancia del fabricante y los hechos en casa no. Subvaloración de los bienes y servicios domésticos que le permite al patrón reducir el salario del obrero, y de este modo el capital explota a sus asalariados y explota a las mujeres de sus asalariados.

Al principio, la estrategia de los empresarios para reducir el salario obrero fue poner a trabajar en la fábrica a toda la familia. Cuando esto resultó insostenible cambiaron la estrategia: dejaron al obrero en la fábrica y pusieron a trabajar en su manutención al resto del grupo doméstico. Lo realice en la fábrica o lo desempeñe en el hogar, el trabajo de la mujer sirve a

la valorización del capital, lo que significa que es productivo y explotado. «En la familia en que todos trabajan —escribió Engels— el individuo tiene necesidad de ganar mucho menos y la burguesía ha aprovechado la coyuntura para rebajar brutalmente el salario, con la ocupación y explotación de mujeres y niños»²⁰. Cuando se «rebaja brutalmente el salario» poniendo a trabajar a la familia no en la fábrica sino en el hogar, ¿ya no hay «explotación de mujeres y niños?». Claro que la hay y su aporte a la acumulación es enorme.

Los quehaceres del hogar no son los únicos trabajos no asalariados y presuntamente no productivos que se perpetúan en el capitalismo. Está también el de los campesinos, que como el de las mujeres es minimizado por Marx, quien sobrestimando el proceso mundial de proletarianización los considera residuales.

EL TRABAJO REALIZADO POR LOS CAMPESINOS DE SUBSISTENCIA

En los años setenta del siglo pasado, feministas como Mariarosa Dalla Costa, María Mies, Verónica Bennholdt-Thomsen, Silvia Federici y otras activistas comprometidas con el ascendente movimiento reivindicativo de las mujeres decidieron que como parte de esta militancia era necesario repensar el lugar de la mujer en una sociedad capitalista que es, ha sido y será esencialmente patriarcal. Por esos años se escribieron libros seminales, como el ya citado *Patriarcado y acumulación a escala mundial*, de María Mies. Pero ellas se dieron cuenta de que también los campesinos del mundo están en movimiento y que la condición de los agricultores domésticos es del todo semejante a la de las mujeres en el hogar. Lo reconocen:

El debate sobre el trabajo doméstico que tuvo lugar entre 1973 y 1979 no incluyó otras áreas del trabajo no asalariado que también son aprovechadas por el capital dentro del proceso de acumulación. Éste es particularmente el caso de todo el trabajo realizado por los campesinos de subsistencia [...] en los países subdesarrollados. Los debates sobre el trabajo doméstico no trascendieron el punto de vista eurocéntrico del capitalismo²¹.

En este punto también hay que enmendarle la plana a Marx, pues igual que desestimó el trabajo doméstico de las mujeres por considerarlo económicamente improductivo, tampoco percibió que el trabajo campesino y artesano pro-

²⁰ Engels, *op. cit.*, p. 91

²¹ María Mies, *ibid.*, p. 86

ductor de mercancías y desarrollado en el seno del capitalismo sirve a la acumulación de capital y es tan explotado como el asalariado. En las notas que vengo comentando, Marx presenta una imagen particularmente desafortunada del campesinado:

El campesino independiente [...] está dividido en dos personas, como dueño de los medios de producción es capitalista; como trabajador es su propio asalariado. En consecuencia, como capitalista se paga a sí mismo su salario y extrae su ganancia de su capital; es decir, se explota como asalariado y se paga, con la plusvalía, el tributo que el trabajo debe al capital. Es posible que también se pague una tercera porción como terrateniente (renta del suelo). También es ley la de que el desarrollo económico distribuye funciones entre distintas personas, y el artesano o el campesino que producen con sus propios medios de producción se convertirían poco a poco, o bien en un pequeño capitalista que también explota el trabajo ajeno, o bien sufriría la pérdida de sus medios de producción [...]. Ésta es la tendencia en la forma de sociedad en la cual predomina el trabajo capitalista²².

La aplicación directa de las categorías propias de la producción capitalista, a un campesino que presuntamente está en vías de encarnarlas plenamente sea como explotador o sea como explotado, es una analogía que nada explica. Sin embargo, Marx lo emplea de nuevo en el que debía ser el capítulo VI del libro I de *El capital*, que finalmente no se incluyó. Pero ahí Marx añade otros conceptos.

Dentro de la producción capitalista, ciertas partes de los trabajos que producen mercancías se siguen ejecutando de una manera propia de los modos de producción precedentes, donde la relación entre el capital y el trabajo asalariado aún no existe de hecho, por lo cual de ninguna manera son aplicables las categorías de trabajo productivo y trabajo improductivo, características del punto de vista capitalista. En correspondencia con el modo de producción dominante, empero, las relaciones que aún no se han subsumido realmente en aquel, se le subsumen idealmente. El trabajador independiente, a modo de ejemplo, es su propio asalariado, sus propios medios de producción se le enfrentan en su imaginación como capital. En su condición de capitalista de sí mismo, se autoemplea como asalariado²³.

Aquí el autor de *El capital* deja claro que en este caso los conceptos productivo-improductivo no aplican (aunque sería mejor decir que no aplican directamente, pero sí indirectamente) y esboza un problema: la producción directa está «dentro de la producción capitalista», pero no ha interiorizado ni las relaciones económicas ni el modo material de producir propio del capital, es decir, que no está «subsumida realmente» en él. Marx señala el problema, pero no lo resuelve, pues la contradicción entre estar y a la vez no estar dentro del sistema, entre ser y a la vez no ser producción capitalista, no se disuelve diciéndolo que lo está idealmente y que lo es en su imaginación.

La cuestión queda expuesta: dentro del sistema del gran dinero se reproducen procesos de trabajo que ni formal ni materialmente se ajustan al modo capitalista de producir, pero que están insertos en el mercado del que proviene parte de lo que emplean y al que va parte de lo que producen. No podemos decir que su trabajo es improductivo, pues como compradores y vendedores se inscriben en los circuitos del capital, pero tampoco podemos afirmar que su labor es productiva, pues hemos identificado lo productivo con asalariado. Declarar que la subsunción es ideal y que la proletarianización es imaginaria, como antes dijo que las mercancías producidas dentro del sistema por productores directos eran mercancías potenciales, no responde a la pregunta.

Rosa Luxemburgo había cuestionado esta formulación en *La acumulación del capital*: «Es una abstracción vacía de sentido aplicar simultáneamente todas las categorías de la producción capitalista al campesinado y concebir al campesino como siendo a la vez su propio empresario, su propio asalariado, su propio propietario. La particularidad económica de los campesinos [...] reside en el hecho mismo de que no pertenecen ni a la clase de los empresarios capitalistas ni a la clase del proletariado asalariado»²⁴. Sobre una base empírica la rechazaban también campesinistas rusos como V. A. Kosinski y A. V. Chayánov, empeñados en descubrir a partir del trabajo de campo la racionalidad económica específica de los pequeños agricultores²⁵.

LA EXPLOTACIÓN DEL TRABAJO CAMPESIÑO POR EL CAPITAL

Los escritos de Marx no resuelven la cuestión expuesta por él mismo porque la respuesta está en encontrar las mediaciones,

²² Marx, *op. cit.*, p. 344

²³ Karl Marx, *El capital. Libro I/capítulo VI, inédito*, Ediciones Signos, Buenos Aires, 1971, p. 82

²⁴ Citado en Daniel Thorner, «Una teoría neopopulista de la economía campesina: la escuela de A. V. Chayánov», en Santiago E. Funes, *Chayanov y la teoría de la economía campesina*, Cuadernos de Pasado y Presente, México, 1971, p. 148

²⁵ A. V. Chayánov, *La organización de la unidad económica campesina*, Nueva Visión, Buenos Aires, 1974

un arte que él pulirá en el futuro hasta ser experto, pero que por ahora no emplea quizá porque ve estas situaciones como residuales, remanentes de un pasado en disolución. Pero un siglo y medio después y en un mundo en el que hay dos mil quinientos millones de campesinos, más nos vale tratar de poner en claro los eslabones que encadenan a los pequeños productores directos con la acumulación de capital.

A fines de los años setenta del pasado siglo, participé junto con María Mies, Verónica Bennholdt-Thomsen y otras activistas y académicas en un congreso organizado por la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Bielefeld, en Alemania. La materia de reflexión era el feminismo, y entre críticas a veces jocosas a la «teoría del valor», como ellas llamaban a la lectura patriarcal del marxismo, salió el tema de la semejanza entre el trabajo campesino y el trabajo doméstico femenino. Ellas produjeron después numerosos y consistentes estudios sobre la inserción de las mujeres en el orden del gran dinero, mientras que yo avancé en mis reflexiones sobre los agricultores domésticos, investigación que se tradujo en el libro *La explotación del trabajo campesino por el capital*²⁶, publicado en 1979. Un estudio en el que trato de abrirme paso en lo que Marx no creyó necesario hacer, pues pensaba que los productores por cuenta propia pronto serían historia: mostrar las mediaciones económicas que permiten al capital apropiarse del excedente generado por el trabajo campesino en tanto que trabajo productivo, es decir, la forma específica de la subsunción de los campesinos en el capital.

Explico ahí que en ciertos procesos productivos (los trabajos del hogar y algunos cultivos) la continuidad, aceleración, especialización e intensificación mecánica del trabajo propio de las fábricas y funcional a un capitalismo que necesita aunar la rotación de lo invertido, choca con la diversidad, discontinuidad, morosidad y estacionalidad propias del trabajo doméstico y de las labores campesinas. Una parte de estos procesos puede uniformarse, intensificarse y operar de manera industrial: los alimentos precocinados, los monocultivos intensivos. Otros, como el cuidado de los niños y los enfermos, se resisten a los procedimientos fabriles. Dato duro que habría que tomar en cuenta para entender la conformación actual de estos sectores.

El reconocimiento de que en determinadas tierras y cultivos la pequeña producción campesina tiene ventajas técnicas y económicas sobre la grande no tuvo que esperar a que llegara el movimiento agroecológico, era algo bien sabido desde los tiempos de Marx, y un autor como John Stuart Mill le dedica cinco muy sustanciosos capítulos de sus *Principios de eco-*

nomía política. Ahí, citando a Laing (*Journal of a Residence in Norway*), sostiene que: «El capital grande, cuando se aplica al cultivo, utiliza tan sólo los suelos más ricos. No puede ocuparse de los pequeños pedazos de tierra improductiva que precisan más tiempo y más trabajo del que es compatible con una ganancia rápida del capital. Pero si bien el tiempo de un trabajador asalariado no puede aplicarse con beneficio en cultivos de esa naturaleza, el dueño de la tierra sí puede dedicarle su tiempo y su trabajo [...] para la subsistencia»²⁷.

En páginas anteriores, Mill había dicho que «nadie puede suponer que todos los productos agrícolas que el país necesita pueden obtenerse sólo en las mejores tierras»²⁸. Si ponemos las dos afirmaciones juntas, la conclusión es obvia: la pequeña producción en tierras que no permiten «una ganancia rápida para el capital» es necesaria para satisfacer la demanda aun donde impera el capitalismo.

Otra ventaja comparativa de los campesinos frente al agro-negocio es la laboriosidad, el celo, el cuidado. Dice Laing: «El trabajo minucioso sobre pequeñas porciones proporciona una productividad superior. Nuestros grandes hacendados [ni siquiera se aproximan] al cultivo tan refinado como el de un jardín y a la atención a los abonos, el drenaje y la limpieza del suelo [...] que distingue a los pequeños granjeros»²⁹.

Después de un exhaustivo recorrido por autores y regiones Mill concluye: «Como resultado del examen de la propiedad campesina, [...] ha quedado bien establecido [...] que no entraña un estado imperfecto de la producción agrícola y que en algunos casos favorece el uso más eficaz de las fuerzas productivas del suelo»³⁰. En este sentido, incluso un autor convencido de la superioridad productiva de la agricultura capitalista, como Karl Kautsky en *La cuestión agraria*, tiene que reconocer con K. Krämer que en algunos casos la agricultura pequeña es más eficiente que la grande: «Para ciertos tipos de cultivo el profesor Krämer afirma que es preferible la pequeña [explotación], se trata de cultivos complejos y costosos, para los cuales cada uno de los trabajos requiere un cuidado especial»³¹.

La mayor eficiencia que para determinados cultivos tiene la pequeña producción fue constatada y argumentada por muchos, de modo que en algún momento de su historia el capital debía darse cuenta de que en ciertas regiones y siembras barrer con los campesinos era contraproducente. Eviden-

²⁶ Armando Bartra, *La explotación del trabajo campesino por el capital*, Editorial Machehual, México, 1979

²⁷ John Stuart Mill, *Principios de economía política*, FCE, México, 1978, p. 245

²⁸ *ibid*, p. 175

²⁹ *ibid*, p. 245

³⁰ *ibid*, p. 273

³¹ Karl Kautsky, *La cuestión agraria*, Siglo XXI Editores, México, 1977, p. 135

cia que en pleno periodo neoliberal hasta el Banco Mundial admitió:

El ajuste estructural dismanteló un elaborado sistema de agencias públicas que proveía a los campesinos de acceso a la tierra, al crédito, a los seguros, a los insumos y a las formas cooperativas de producción. La expectativa de que estas funciones serían retomadas por agentes privados no ocurrió. Mercados incompletos y vacíos institucionales impusieron costos enormes, un crecimiento que se frustró y pérdidas en bienestar para los pequeños productores, amenazando su competitividad y en muchos casos su sobrevivencia [...]. Es necesario volver a colocar este sector en el centro del programa de desarrollo³².

¿Inesperada sensibilidad social del gran banquero? No. Simple reconocimiento de lo evidente: los campesinos son, han sido y serán necesarios aun en el capitalismo más desmecatado. Cabe ahora preguntarse en qué conceptos de economía política podemos encuadrar esta aparente anomalía.

Para Marx, el sometimiento del trabajo por el capital puede analizarse mediante dos conceptos distintos: subsunción formal, que se refiere a las relaciones económicas (propiedad privada de los medios de producción, trabajo asalariado), y subsunción real, que incluye a la formal, pero supone también la revolución de los procesos productivos. A veces a este segundo aspecto lo llama subsunción material, de modo que la subsunción real sería la convergencia de subsunción formal y subsunción material.

En el orden del tiempo, la imposición de las formas económicas capitalistas (expropiación, proletarianización), preceden a la revolución técnica de los procesos productivos (mecanización, división del trabajo), transformación material con la que se completa el sometimiento del trabajo al capital y tenemos una subsunción real. Pero si la naturaleza de ciertos procesos productivos no permite una subsunción material eficiente, pues ahí los procedimientos industriales resultan contraindicados —como sucede con gran parte de los trabajos agrícolas y de las labores domésticas—, no tiene caso imponerles las formas económicas de la producción fabril. Y es que proletarianizar los cuidados, la madre que amamanta al futuro proletario o el labriego que atiende amorosamente su huerta de café, no es rentable. En términos de subsunción, las actividades que no se pueden revolucionar técnicamente, de subsumir materialmente, tampoco tiene sentido imponerles las formas económicas capitalistas, de subsumirlas formalmente.

Tiene razón Marx: subsisten en el capitalismo actividades que no están directamente subsumidas en el capital, pero de-

cir que están idealmente subsumidas no explica mucho. En cambio, otros dos conceptos del propio Marx pueden darnos la clave, ya que en el mismo capítulo VI inédito el autor de *El capital* nos habla de la subsunción como forma general de una sociedad y de la subsunción como forma particular de uno u otro segmento de ésta. Esto significa que en una sociedad cuya forma general es capitalista puede haber segmentos de la misma cuya forma particular no sea directamente capitalista. Y digo directamente porque si un proceso de trabajo está inserto por todos lados en el mercado capitalista, de una forma u otra estará sometido al capital, aunque el trabajo que ahí se emplee no sea asalariado y no todo lo que ahí se produzca sea mercancía.

Tenemos entonces que las labores domésticas y los trabajos campesinos cuyas relaciones económicas internas y cuya forma de producir no son ni formal ni materialmente capitalistas, pueden estar sometidas al capitalismo si éste es la forma general y dominante de la sociedad en que se insertan, y configuran con esta inserción oblicua un arreglo conveniente para el gran dinero. Si es funcional al capitalismo, es previsible que tal arreglo se prolongue, lo que efectivamente sucede: pasan los siglos y las amas de casa y los campesinos siguen ahí.

Lo que falta es explicar cómo opera esta sumisión atípica del trabajo femenino y campesino al capital. Cómo es que lo que no fue producido como mercancía se vuelve mercancía, cómo es que el trabajo aparentemente improductivo deviene productivo, cómo es que el excedente se transforma en plusvalía. Lo que falta es explicar cómo es que el capital explota el trabajo de las mujeres y campesinos.

LA LEY DE SAN GARABATO: COMPRAR CARO Y VENDER BARATO

Veamos el caso de los campesinos. El labriego moderno compra y vende, está inserto en el mercado capitalista. En sus intercambios con el capital siempre termina perdiendo. «Es la Ley de San Garabato: comprar caro y vender barato», acostumbra a decir los rústicos mexicanos. Y así es. Pero ese intercambio a todas luces desigual, ¿a qué se debe?

En el ámbito de la circulación no hay razón alguna por la que uno siempre gane y otro siempre pierda, para entenderlo hay que ir a sus diferentes lógicas productivas. El capital compra y vende para lucrar y si no hay ganancia en la operación se retira del mercado e invierte su dinero en otra actividad productiva que sí le deje utilidades. El campesino compra y vende para vivir y mientras la operación le deje lo suficiente para subsistir seguirá vendiendo y comprando; incluso si pierde es posible que por un tiempo persista en su ruinosa producción, porque hay que vivir y porque sus recursos (mayormen-

³² Banco Mundial, *World Development Report*, 2008

te tierra y trabajo) no son dinero que pueda invertir en otra cosa. De ahí que como tendencia general, el precio de venta de lo que producen los empresarios gire en torno a su costo de producción más una ganancia media, mientras que por lo general el precio de venta de los productos cosechados principalmente por campesinos gira en torno al costo de producción sin ganancia alguna.

En la desigualdad de los intercambios intervienen muchos factores: el tamaño de quien compra y de quien vende, las prácticas monopólicas, los mercados especulativos. Pero el factor subyacente está en un choque de racionalidades socioeconómicas: el capitalista invierte para ganar, el campesino trabaja para vivir. El primero se retira cuando los precios son bajos, con lo que hace que la oferta disminuya y suban las cotizaciones; el segundo, sigue produciendo aun si los precios son bajos porque en ello le va la vida, lo que hace que la oferta se mantenga y los precios permanezcan bajos.

El campesino invierte su propio trabajo en la producción de bienes, una parte de los cuales transforma en mercancías que vende con el fin de adquirir otros bienes que necesita y no produce. El capitalista invierte dinero en la producción mediante trabajo asalariado de mercancías que vende por una cantidad que debe ser mayor a la que invirtió. Lo que mueve al campesino son los valores de uso, la calidad; lo que mueve al capital es el valor de cambio, la cantidad.

En el mercado capitalista realmente existente la regla son intercambios desiguales en que los precios de venta se apartan de los precios de producción. Disparidades que se originan en los desequilibrios oferta-demanda, aunque también en los monopolios y la especulación. Pero el intercambio desigual al que están sometidos los campesinos es de otra clase. En los primeros, se reparte entre los distintos capitales la plusvalía producida por el trabajo de los previamente expropiados; en el segundo, se transfiere al capital la plusvalía producida por el trabajo de los campesinos. La primera es una relación de distribución, la segunda es una relación de explotación.

Hace 44 años, en el apartado «La clave de la explotación del campesinado», que forma parte del libro *La explotación del trabajo campesino por el capital*, para tratar de explicar la explotación campesina utilicé el mismo fraseo con el que Marx, en *El capital*, pone en claro la explotación obrera. El libro donde se publicó inicialmente ya es historia, y otro libro mío, *El hombre de hierro. Límites naturales y sociales del capital en la perspectiva de la gran crisis*, donde incluí una versión algo más breve, se reimprimió por última vez en 2014.

«La clave...» es un texto difícil de consultar³³, pero recapitulando su contenido podemos sostener lo siguiente: refiriéndose a quienes realizan labores domésticas, pero con conceptos que podrían aplicarse a la totalidad de los trabajadores no asalariados, Marx reconoce que producen bienes potencialmente mercantiles y añaden valor a los objetos sobre los que recae su trabajo, pero se trata de una «insignificante categoría de obreros». Ahí está el origen de la subestimación, pues para él estos afanes, además de económicamente ambiguos, son marginales y se extinguirán totalmente cuando el capital absorba íntegramente la producción acabando con la doméstica, la campesina, la del trabajador por cuenta propia y la artesanal.

Un siglo y medio después es claro que el capital no subsumió directamente todos los procesos productivos preexistentes y regurgitó algunos que se había tragado, de modo que los trabajos no asalariados de ninguna manera son residuales. Y si la condición proletaria abierta está lejos de ser exclusiva y cada día son más quienes no laboran directamente para el gran dinero, la preservación de la capacidad explicativa de la teoría del valor-trabajo demanda revisiones conceptuales como las que aquí y en otros escritos he venido intentando.



³³ Armando Bartra, *El capital en su laberinto. De la renta de la tierra a la renta de la vida*, Ítaca/UACM, México, 2006, p. 247-250



La realidad de las y los jornaleros agrícolas en México

FRENTE A LA ACTUAL REFORMA LABORAL

Isabel Margarita Nemecio

El primero de mayo es una fecha emblemática, pues nos recuerda las luchas históricas que han gestado las y los trabajadores por la exigencia de sus derechos y por condiciones laborales más justas. El Día del Trabajo mantiene la memoria histórica de los movimientos obreros que visibilizaron las precarias condiciones de trabajo y de vida a las que los trabajadores eran sometidos y subordinados por sus patrones o personas que los empleaban. Una clase trabajadora que laboraba en condiciones de explotación, que recibía salarios inferiores que no correspondían con la carga de trabajo, con jornadas de trabajo extenuantes, fue consolidando un movimiento más organizado.

El movimiento obrero quedó marcado por la lucha obrera de 1886, en Estados Unidos, año en que se registraron diversas protestas por la reducción de la jornada laboral a 8 horas. La más representativa y trágica fue la Revuelta de Haymarket, un evento que implicó varios días de manifestaciones y resistencia, pero que culminó el 4 de mayo, cuando se llevó a cabo un acto público que reunió a diversas personas, la mayoría trabajadores. Casi al finalizar el evento, un desconocido arrojó una bomba que al explotar dejó varias personas heridas. Después de este hecho trágico, fueron condenados a muerte por las autoridades cinco líderes sindicales, a partir de entonces conocidos como los Mártires de Chicago¹. Años después, en 1889, el Congreso Obrero Socialista de la Segunda Internacional instituyó el 1 de mayo como el Día Internacional de los Trabajadores, en homenaje a aquellos mártires. Actualmente, esta fecha

¹ Carlos Droguett, «Los mártires de Chicago» [manuscrito], disponible en *Memoria Chilena*, Biblioteca Nacional de Chile.

se celebra en diversos países como símbolo de la lucha por la justicia social y la reivindicación de los derechos laborales de las y los trabajadores.

En México, ha habido un progreso en la conquista de los derechos laborales que se deriva de la lucha de la clase trabajadora desde la Revolución Mexicana. Nuestra normatividad ha ido incorporando modificaciones a la jornada laboral, el pago de horas extras, el acceso a la seguridad social y otra serie de derechos que son retomados cada 1 de mayo, con la conmemoración del Día del Trabajo. A esta celebración se suman diversos colectivos, organizaciones, grupos, sectores, movimientos y sindicatos que se manifiestan en todo el territorio nacional. Sin embargo, a pesar de ser considerado un día feriado o festivo que no es laborable, sino de descanso obligatorio, como lo señala el artículo 74 de la Ley Federal del Trabajo (LFT), hay un sector de la población que no sale a tomar las calles para reivindicar sus derechos, no sale a manifestarse en contra de las condiciones de explotación laboral y de los abusos que enfrentan cotidianamente en los campos agrícolas donde laboran. Este sector está representado por miles de hombres y mujeres, principalmente de contextos rurales e indígenas, denominados jornaleros y jornaleras agrícolas.

El 1 de mayo, ellas y ellos no celebran el Día del Trabajo porque laboran de manera habitual como cualquier otro día; tampoco reciben el pago justo de sus salarios, pues según la ley deberían percibir el triple del salario por laborar en día de descanso obligatorio, como está estipulado en el artículo 75 de la LFT. Las y los jornaleros agrícolas celebran el Día del Trabajo bajo la sombra de la precariedad laboral y de la exclusión de sus derechos elementales. Sus condiciones de trabajo y de vida siguen sin abordarse abiertamente en la agenda política a pesar de ser trabajadores y trabajadoras agrícolas que realizan tareas primordiales para nuestra economía, como lo reconoció el Congreso de la Unión en diciembre de 2023, considerando a las y los jornaleros como trabajadores esenciales para la seguridad alimentaria del país, y estableció medidas para garantizar su derecho a un salario justo, a la seguridad social, a una vivienda digna, a la educación y otra serie de derechos laborales².

A pesar de las recientes modificaciones a la Ley Federal del Trabajo y del Seguro Social, ¿las y los jornaleros agrícolas tienen motivos para conmemorar el Día del Trabajo? Sin duda, el 1 de mayo será para ellas y ellos un día más, resultado de un sistema económico que condiciona sus derechos laborales más básicos. Pero también es una fecha que evoca la lucha y la voz que ellos han levantado ante las injusticias sociales, impulsando formas de resistencia como el levantamiento de marzo

de 2015, en San Quintín, Baja California, o el paro simbólico que 269 trabajadores y trabajadoras llevaron a cabo el 20 de abril de 2024, en el rancho El Piloto, propiedad de la empresa Baja Best, ubicada en el municipio de Mulegé, Baja California Sur³, con el objetivo de denunciar el incumplimiento de casi un año en el pago de sus salarios.

Estos intentos de reivindicar sus derechos van más allá de la celebración del Día del Trabajo, son un llamado a visibilizar que no todo está ganado. Aún hoy, a pesar de los avances alcanzados, siguen siendo muchos los pendientes y es importante reflexionar sobre todos ellos: por ejemplo, cómo reducir las desigualdades laborales, la eliminación de la brecha salarial entre jornaleros y jornaleras, cómo contrarrestar las limitaciones del diseño integral de políticas públicas focalizadas para este sector, así como la aplicación de la normatividad que garantice el ejercicio pleno de los derechos de las y los jornaleros agrícolas como trabajadores y trabajadoras remuneradas.

REFORMA A LA LEY FEDERAL DEL TRABAJO, UN RETO PARA EL CUMPLIMIENTO DE LOS DERECHOS DE LAS PERSONAS JORNALERAS

En diciembre de 2023, la Cámara de Diputados amplió el reconocimiento de los derechos de las personas que laboran en el campo con el objetivo de garantizar la seguridad social de las personas trabajadoras asalariadas, ya sean permanentes o temporales, a través de una reforma a la Ley Federal del Trabajo y la Ley del Seguro Social. El proyecto establece:

Que el trabajo en el campo deberá formalizarse mediante un contrato por escrito, el cual detalle las condiciones laborales y los mecanismos para informar a los trabajadores sobre sus derechos y a las autoridades pertinentes en caso de posibles infracciones. Además, señala que las personas empleadoras tendrán la obligación de suministrar gratuitamente habitaciones adecuadas e higiénicas, alimentación suficiente y variada, agua potable, así como servicios sanitarios durante la jornada de trabajo, y destaca la responsabilidad de proporcionar asistencia médica o traslado a lugares con servicios médicos cercanos⁴.

En la minuta, se destaca el reconocimiento como trabajadores y trabajadoras esenciales y «la importancia de reco-

² Canal del Congreso, *Aprueban en San Lázaro establecer seguridad social a personas trabajadoras del campo*, 19 de diciembre de 2023

³ H. Congreso del Estado de Baja California Sur, *Denuncian diputadas violencia laboral contra jornaleros agrícolas de Vizcaino*, Boletín núm. 082/2024, La Paz, Baja California Sur, 23 de abril de 2024

⁴ Canal del Congreso, *op. cit.*

nocer y ampliar los derechos laborales de los trabajadores del campo, pues su papel es fundamental en la producción de alimentos y el sustento de las comunidades rurales»⁵. El proyecto contempla, además, sanciones ante el incumplimiento de estas disposiciones, «establece una multa de 250 a dos mil 500 veces la UMA, para las personas empleadoras que violen las normas de protección del trabajo del campo»⁶, y «obliga a las autoridades a realizar inspecciones una vez al año en los lugares de trabajo»⁷.

El reconocimiento de las y los jornaleros como trabajadores esenciales y la ampliación de sus derechos laborales es

un paso importante en la visibilización e inclusión en la normatividad de los derechos fundamentales «para los casi 3 millones de personas trabajadoras agrícolas que hay en México»⁸. Sin embargo, ellas y ellos continúan trabajando en condiciones desfavorables y de precariedad laboral.

Esta precarización tiene un vínculo estrecho con las condiciones laborales y sociales de las personas jornaleras. Se estima que «el 45.2 % de las y los trabajadores agrícolas tienen entre 15 y 29 años, y de cada 100, 15 son mujeres, mientras que el 24 % de las personas jornaleras habla una lengua indígena»⁹. Por

otro lado, «el 93.4 % carece de un contrato formal de trabajo, el 90.9 % labora sin tener acceso a instituciones de salud por parte de su empleador, el 85.3 % no cuenta con prestaciones laborales, el 33.3 % gana hasta un salario mínimo y el 54.5 % percibe más de uno y hasta dos salarios mínimos»¹⁰.

Estos datos demuestran que el trabajo que realizan las y los jornaleros agrícolas atraviesa por un modelo de explotación y desigualdad laboral que se ha fortalecido durante años y que perpetúa esa posición subordinada en el mercado de trabajo y en las relaciones labo-

detección de posibles víctimas en campos agrícolas, México, 2018, p. 37-38

¹⁰ Comisión Nacional de los Salarios Mínimos, *La pandemia de la covid-19 exhibe la indefensión y precariedad de millones de jornaleros agrícolas. Es el momento histórico para fijar el salario mínimo y saldar la deuda con este sector y sus familias*, Boletín núm. 10/2020, Ciudad de México, 8 de abril, 2020

⁵ *ibid.*

⁶ *ibid.*

⁷ Blanca Juárez, «Jornaleras y jornaleros agrícolas son finalmente considerados trabajadores esenciales», en *El Economista*, 23 de enero, 2024

⁸ Daniel Cortés Martínez, «Migrantes jornaleros agrícolas, de los sectores más precarizados», en *Animal Político*, 25 de diciembre, 2023

⁹ Comisión Nacional de los Derechos Humanos, *Estudio sobre la intervención de las autoridades del trabajo en la prevención de la trata de personas y la*





rales cotidianas que establecen; que se inscribe en una división de la población jornalera donde su fuerza de trabajo se comporta como cualquier otra mercancía; que responde principalmente a una demanda definida por el número de jornales que realizan.

Las y los jornaleros enfrentan en los campos agrícolas jornadas de trabajo que en algunas ocasiones superan las 8 horas establecidas en la LFT, su salario ronda entre los 100 y 250 pesos por día (en algunos campos agrícolas les pagan menos o pueden ganar más, pero depende de las horas invertidas y de la cantidad de producto recolectado), casi ninguna trabajadora y trabajador agrícola goza de seguridad social o de prestaciones, ni del pago de aguinaldo, prima vacacional, pago de utilidades, más otra serie de limitaciones en sus derechos laborales.

Este contexto se agudiza para las mujeres jornaleras (sobre todo si son de contextos rurales o indígenas), pues ellas suman a su actividad laboral la crianza y el cuidado de las y los hijos (ya

que se considera como su obligación o deber), además del cuidado de otros integrantes de sus familias. Para ellas, la maternidad significa enfrentar en los campos agrícolas mayores riesgos por las condiciones en que realizan su trabajo, porque están expuestas al contacto con plaguicidas, herbicidas u otro tipo de productos que les rocían a los cultivos que ellas recolectan. Además, están expuestas, al igual que los hombres, a altas temperaturas por laborar en campos a cielo abierto o en invernaderos. Frente a estos riesgos, los ingresos que perciben no compensan su labor en el jornal y las tareas de cuidado.

Esta situación se agudiza porque enfrentan condiciones de explotación laboral sin derechos, que se combinan con otra serie de sentimientos producidos por su situación laboral, como angustia, incertidumbre, carencias, soledad, preocupaciones y duelos. De esta forma, ellas y ellos tienen que generar estrategias que compensan sus bajos salarios para satisfacer sus necesidades más inmediatas y sobrellevar sus situaciones de salud físi-

ca y emocional, sus enfermedades, y todas esas consecuencias no visibles pero que son producto de sus condiciones de trabajo y de vida en los campos agrícolas. En general, a pesar de que las y los jornaleros agrícolas perciben ingresos propios, siguen enfrentando su condición de hombres y mujeres asalariadas excluidas y con una clara desigualdad de género que no les garantiza acceder a puestos mejor remunerados.

En este escenario, y a partir de los cambios aprobados en la LFT, estas condiciones tendrán que mejorar y presentar cambios sustanciales, comenzando con las formas en que se establecen las relaciones de trabajo, que con la reforma reciente ha quedado establecido que las y los jornaleros, sean permanentes o eventuales, «deberán gozar de derechos laborales y tendrán que quedar establecidos por medio de un contrato por escrito. Al final de su trabajo, sus empleadores deberán brindarles la parte proporcional que corresponda por concepto de vacaciones, prima vacacional, aguinaldo y cualquier otra prestación a la que tengan derecho, según lo establece el artículo 280 de la LFT»¹¹. Pero además de estos cambios, se materializan otros derechos fundamentales, tales como el pago de salarios justos, el acceso a la seguridad social, a una vivienda digna, a la educación (principalmente para las niñas, niños y adolescentes, hijos de las familias jornaleras), así como la prevención de la subcontratación laboral. En este sentido, la actual reforma establece que «las empresas deberán entregar a cada trabajador y trabajadora una constancia en la que se señalen los días laborados y los salarios totales devengados, la antigüedad acumulada hasta esa fecha,

¹¹ Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley Federal del Trabajo y de la Ley del Seguro Social, en materia de derechos laborales de las personas trabajadoras del campo, Diario Oficial de la Federación, 24 enero, 2024

así como las retenciones y aportaciones por concepto de seguridad social»¹².

La reforma también estableció cambios en materia salarial para las y los jornaleros agrícolas, mismos que están establecidos en el artículo 280 de la LFT. En este sentido, ordena a la Comisión Nacional de los Salarios Mínimos (Conasami) «tomar en cuenta los sueldos y prestaciones que esa población ha alcanzado en empresas y negocios, gracias a su organización gremial y defensa de derechos laborales»¹³. Por otro lado, en materia de inspección en los campos agrícolas, establece obligaciones para las empresas y la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, a partir de la creación del artículo 284 bis de la LFT, el cual indica que «los inspectores del trabajo tienen la atribución y el deber de hacer visitas de vigilancia al menos una vez al año en temporada de producción para constatar el cumplimiento de las empresas»¹⁴. Para robustecer estas visitas de inspección, la reforma modificó también el artículo 542, «respecto a las obligaciones de los inspectores del trabajo. En la fracción v se añade que la inspección se realizará con especial atención tratándose de personas trabajadoras del campo, indígenas y afromexicanas»¹⁵.

Otra modificación sustancial es lo relativo a las viviendas, que por lo general son espacios que les asignan a las y los jornaleros y sus familiares, principalmente migrantes, cuando arriban a los campos agrícolas. Estos espacios suelen ser galeras que cuentan con la infraestructura necesaria y se ubican dentro de espacios especiales que destinan las empresas agrícolas, pero también están las cuarterías, cuartos o viviendas en obra negra carentes de los servicios básicos. A éstos se suman las viviendas que adaptan las familias jornaleras con materiales de desecho, así como los espacios improvisados como vagones, bodegas

y terrenos baldíos que les asignan las personas que los emplean. En este sentido, la reforma establece en el artículo 283 la «obligación de las empresas de proveer a las jornaleras y jornaleros migrantes una vivienda sin costo, que deberá cumplir con al menos las siguientes características: piso firme, agua potable, baños, regaderas, lavaderos y comedor. También se deben hacer cargo de las reparaciones de la vivienda, de proporcionar comida sana y saludable a las y los trabajadores, y de contratar un seguro de vida que les cubra el traslado desde que salen de sus hogares en otras entidades, hasta llegar a la entidad de destino»¹⁶. Además, establece que «las empresas les proporcionarán servicio de guardería o de cuidado infantil y si los sembradíos se encuentran fuera de las poblaciones,

abrirán escuelas cerca de los centros laborales para que las hijas y los hijos de su personal sigan estudiando»¹⁷. Estas disposiciones las realizarán en conjunto con las autoridades de la Secretaría de Educación Pública, para garantizar que la enseñanza que se imparta en esos espacios educativos contemple la diversidad bilingüe, regional y socio-cultural de las niñas, niños y adolescentes.

A estas modificaciones en la ley se suma otro cambio trascendental en relación con la reducción de la brecha salarial entre las y los jornaleros agrícolas, es decir, la reforma apunta que «queda ex-

presamente prohibido pagar salarios menores a las mujeres por realizar las mismas actividades que los hombres, así como remunerar en especie a cualquier trabajador o trabajadora»¹⁸.

Si bien las reformas de la LFT realizadas en 2019 y 2023 dignifican el trabajo del campo, particularmente el que realizan las y los jornaleros como trabajadores y trabajadoras remuneradas, también es importante considerar que su cumplimiento implica riesgos y falta de certeza en torno a la capacidad de las empresas del sector agrícola que no producen a gran escala para cumplir con esas disposiciones. Ade-



¹² Blanca Juárez, *op. cit.*

¹³ Jimena Ortiz, «¿Quién pagará la reforma laboral para jornaleros?», en *El Economista*, 23 de febrero, 2024.

¹⁴ Blanca Juárez, *op. cit.*

¹⁵ *ibid.*

¹⁶ *ibid.*

¹⁷ *ibid.*

¹⁸ *ibid.*

más, existe preocupación respecto a la efectividad de esta legislación, ya que podría verse obstaculizada por la carencia de un marco normativo que disponga de los recursos y medios para su vigilancia.

LAS REFORMAS LABORALES Y LA LUCHA POR LOS DERECHOS HUMANOS DE LAS PERSONAS JORNALERAS

El Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley Federal del Trabajo y de la Ley del Seguro Social, en materia de derechos laborales de las personas trabajadoras del campo, particularmente de las y los jornaleros agrícolas, representa un reto aún mayor, pues el marco normativo debe realmente garantizar la protección de sus derechos humanos y laborales, así como el cambio gradual en sus condiciones de trabajo y de vida en los campos agrícolas.

Los cambios recientes a estas leyes deben de estar enmarcados en la protección de los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales de las y los jornaleros y sus familias, con la finalidad de que les garantice las condiciones económicas y sociales necesarias para una vida digna, para su acceso a la educación, salud, trabajo justo, vivienda, alimentación, asimismo a un medio ambiente sano, seguro y a cuestiones como la cultura, recreación y espacios óptimos, por mencionar algunos. Además, se debe procurar el acceso a la justicia en los casos de violación a sus derechos, así como a un debido proceso y a que gocen de los instrumentos y herramientas que les permitan contar con un acompañamiento jurídico e institucional apropiado y con pertinencia cultural.

Por ello, es fundamental que el marco normativo contemple los estándares que reconocen estos derechos a nivel internacional y regional y de los cuales el Estado mexicano es parte, razón por la cual está obligado a protegerlos dentro de sus normativas y políticas. Asimismo, debe enmarcarlos a partir de las distintas recomendaciones generales que ha emitido la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, la cual señala la urgencia de «mejorar sustantivamente sus condiciones laborales y sus condiciones de vida»¹⁹. Para garantizar efectivamente los derechos humanos de las y los jornaleros agrícolas, en cumplimiento de la reciente reforma a la LFT, es primordial que se adopten las medidas necesarias para que realicen las inspecciones tal como lo señala la norma, pero también es necesario que la STPS garantice a sus inspectores e inspectoras las condiciones debidas y accesibles que respondan a sus necesidades

del servicio, así como los medios y recursos para la debida realización de las inspecciones. Es vital que se contemplen espacios de formación y capacitación en relación con los contextos de las y los jornaleros y sus familias, al mismo tiempo que se garantizan los mecanismos de seguimiento a las inspecciones realizadas y se implementan procedimientos de transparencia y acceso a la información. Las autoridades deben establecer, adoptar e implementar con claridad las medidas necesarias para supervisar los traslados de las y los jornaleros agrícolas, a fin de que los vehículos utilizados sean adecuados, ofrezcan buenas condiciones de higiene y suficiente capacidad de espacio, y que se provea de un seguro contra accidentes durante sus trayectos.

Es importante que se establezca una coordinación inter-institucional entre las autoridades laborales a nivel estatal y federal para la supervisión que harán en materia de vivienda, y se garanticen las recomendaciones redactadas en el decreto. También, debe vigilarse lo relativo al cumplimiento del pago de los salarios para que se realicen en los tiempos y plazos establecidos por la ley, así como garantizar que al finalizar sus contratos se concluya la relación laboral conforme a derecho y se realice el pago de la parte proporcional que les corresponde por los conceptos de aguinaldo, vacaciones y demás prestaciones a que tengan derecho, entre ellas la entrega de la parte que les toca por el concepto de reparto de utilidades.

Las autoridades laborales deberán verificar que efectivamente se garantice su acceso a la salud, que va más allá de que reciban atención médica inmediata, independientemente de que estén afiliados o afiliadas al Instituto Mexicano del Seguro Social. Por otro lado, se deberá garantizar a las y los jornaleros los medios y recursos jurídicos ante la violación de alguno de sus derechos. Ese acompañamiento deberá ser integral desde un enfoque de derechos humanos e interculturalidad y con perspectiva de género, que les brinde acceso a recibir asesoría, orientación y una representación jurídica.

Las autoridades educativas a nivel estatal y federal deberán ofrecer opciones educativas que se ajusten a las necesidades de las niñas, niños y adolescentes, así como a sus familiares, además de garantizarles su acceso a programas que fortalezcan su educación. De igual manera, se deberán desarrollar estas acciones, sus mecanismos de planeación e implementación, así como contar con un presupuesto robusto que permita que las autoridades den cumplimiento a las responsabilidades establecidas por la actual reforma; por su parte, las empresas agrícolas o los empleadores tendrán que generar gradualmente los cambios necesarios que tengan un impacto favorable en la calidad de vida y trabajo de las y los jornaleros agrícolas y sus familias, pero también deberán cumplir de ma-

¹⁹ Comisión Nacional de los Derechos Humanos, *Recomendación general 36/2019 sobre la situación de la población jornalera agrícola en México*, Ciudad de México, 20 de mayo de 2019

nera estricta las legislaciones, evitando la omisión y el debilitamiento del marco normativo.

Estas demandas no son nuevas, siempre han estado presentes y son la bandera que encabeza el Día del Trabajo en México. Esta reforma y los cambios a la LFT deben contribuir para que las y los jornaleros no continúen siendo los asalariados más explotados y desprotegidos del medio rural, sujetos a un proceso de precarización laboral que ha ido mermando su calidad de vida, lo que genera en ellas y ellos procesos de envejecimiento prematuro y el desgaste físico y de su salud.

El Día del Trabajo es una oportunidad para reflexionar sobre los logros y desafíos en el ámbito laboral, principalmente en el contexto de un sector de la clase trabajadora que no es visible, cuya voz no se escucha y que en ocasiones es abandonada por sindicatos que se ostentan como sus representantes, pero que nunca han tenido un acercamiento real ni una representación sindical que garantice la protección de sus derechos.

Las reformas han sido significativas en justicia social para las y los jornaleros agrícolas, pero también será un verdadero desafío para las autoridades laborales (de los distintos órdenes de gobierno) y para las empresas agrícolas o empleadores, pues deberán adecuar sus operaciones y recursos para cumplir con la ley que entró en vigor. A este escenario se suman los discursos que han señalado que esta reforma podría obstaculizar la creación de empresas agrícolas rentables, o generar barreras para los empleadores que no producen a gran escala, pero que contratan un volumen considerable de mano de obra jornalera para sus cultivos. Además, hay quienes insisten en la falta de garantías para que el Estado mexicano reconozca y asuma la labor de solventar los rezagos, desigualdades y brechas del trabajo jornalero que son de su competencia resolver.

Los retos son diversos y las responsabilidades son compartidas, pero éstas se tendrán que ir ajustando y adaptando a las nuevas situaciones, porque, de no ser así, se condena a las y los jornaleros agrícolas a seguir trabajando en condiciones de explotación laboral, con salarios tan bajos que los colocan en la línea de subsistencia; se les condena, además, a seguir resistiendo a quienes los discriminan, revictimizan y criminalizan, lo que ocasiona otros impactos en sus familias, en las niñas y niños, en las juventudes y en su entorno comunitario y social.

Las jornaleras y jornaleros agrícolas comparten entre sí la experiencia de atravesar situaciones de vida y laborales similares, es por eso que el trabajo agrícola que realizan se vuelve el eje que estructura sus prácticas y la forma de verse y hacerle frente al abuso, explotación y abandono institucional, en busca de un proyecto de vida distinto, más justo. Por eso, el Día del Trabajo debe ser un día para seguir avanzando en la exigencia de un trabajo más justo para ellos y en el reconocimiento de sus derechos.



La clase obrera y la 4T

Francisco Pérez Arce

I

El salario es el marcador de la relación entre capital y trabajo. Es el resultado de la correlación de fuerza entre la clase obrera y la clase capitalista. Desde otro punto de vista, el conjunto salarial, es decir, la suma de todos los salarios en relación con el conjunto de todo lo producido, revela la desigualdad existente en una sociedad. Cuando la 4T, recordando a Morelos, exige «moderar la pobreza y la opulencia», uno de los mecanismos principales para lograrlo es aumentar los salarios y aumentar también la proporción de todo lo producido y la parte que corresponde a los trabajadores.

Durante décadas el salario disminuyó sistemáticamente. Entre 1976 y el año 2000, es decir, en sólo 24 años, el salario mínimo se achicó en 75 %. Fue un descenso brutal, casi increíble. El ingreso de un trabajador de salario mínimo que en 1980 era de 100 pesos, dos décadas después era sólo de 25. En los años siguientes dejó de caer, se mantuvo constante durante el periodo 2001-2016. Pero en 2019 cambió la tendencia. Durante el primer gobierno de la 4T, entre 2019 y 2024, el salario mínimo se duplicó, y hay que decir que el salario mínimo influye en todos los salarios. Su aumento empuja hacia arriba a los salarios contractuales: aquellos que se negocian anualmente en los contratos colectivos de las empresas.

Como puede verse en el siguiente cuadro, el nivel más alto del salario mínimo se obtuvo en 1977 (354.1), bajó de manera continua durante 24 años, hasta llegar a su nivel más bajo en 2001 (90.1). Durante los siguientes años se mantuvo estable, tocando otro punto mínimo en 2009 (89.2). Durante los siguientes



tes siete años se mantuvo otra vez estable hasta 2016, último año registrado¹.

Breve historia del salario mínimo

Año (enero)	Salario mínimo Índice real	Año (enero)	Salario mínimo Índice real
1969	242.8	1993	117.3340
1970	266.9612	1994	116.7552
1971	254.4256	1995	113.3537
1972	289.9511	1996	92.1045
1973	271.9589	1997	96.0432
1974	297.4057	1998	95.9709
1975	309.4014	1999	91.9310
1976	336.2891	2000	91.1331
1977	354.1186	2001	90.1758
1978	336.1759	2002	91.0273
1979	330.6413	2003	90.4623
1980	319.4893	2004	90.5085
1981	325.2613	2005	90.4610
1982	332.4369	2006	90.5175
1983	257.3469	2007	90.4367
1984	223.1924	2008	90.7031
1985	217.7335	2009	89.2864
1986	206.1089	2010	89.6225
1987	188.8573	2011	89.9023
1988	173.9805	2012	90.0369
1989	143.8545	2013	90.9752
1990	137.0254	2014	90.4654
1991	127.2396	2015	91.4553
1992	120.8541	2016	95.2753

¹ El cuadro está tomada del libro Saúl Escobar, *El camino obrero, historia del sindicalismo mexicano, 1907-2017*, FCE, México, 2021, p. 189

Por todo lo anterior, la política salarial del gobierno de la 4T es muy significativa. Es una postura en favor de los obreros, o más precisamente, de todos quienes vivimos de un salario: empleados de gobierno, trabajadores de empresas privadas de todo tipo, obreros industriales, albañiles, peones, todos aquellos que al final de cada semana o de cada quincena cobran por el trabajo realizado y tienen un patrón que es quien les paga.

II

¿Cómo es posible que durante dos décadas haya caído el salario y durante otros muchos años se hubiera mantenido en el fondo? La respuesta a esta pregunta nos lleva a recorrer la historia del movimiento obrero en la segunda mitad del siglo xx.

En 1948, el Sindicato Ferrocarrilero sufrió una gran derrota cuando el gobierno intervino para impedir la democracia interna e imponer por la fuerza a un líder títere que obedeciera las instrucciones de la gerencia, o sea, que estuviera al servicio del patrón y no de la base trabajadora. El líder impuesto, de apellido Díaz de León, era apodado *El Charro*; así nació lo que el resto del siglo xx fue conocido como «charrismo». La palabra definía un sindicalismo antidemocrático al servicio de la política del gobierno y que cuidaba los intereses de los patrones. Hubo resistencia en muchos gremios, pero esa resistencia siempre encontró la represión violenta como respuesta. Uno de los movimientos más emblemáticos fue en el propio gremio ferrocarrilero, en 1958.

Diez años después de instaurado el charrismo, los trabajadores se organizaron sin pedirle permiso al líder y recurrieron a la huelga para reclamar un aumento salarial. Los tra-

bajadores sintieron que el aumento era urgente, pues había disminuido aceleradamente en los años anteriores sin que la dirección del sindicato hiciera nada, sólo daba largas y aceptaba lo que la empresa dijera. Así que el aumento se convirtió en una demanda impostergable. El movimiento tuvo tal fuerza que no sólo logró el aumento exigido, sino que consiguió democratizar su sindicato eligiendo a un líder auténtico, Demetrio Vallejo.

En ese mismo 1958, otros gremios se levantaron, obtuvieron conquistas salariales y echaron a los líderes charros. En ese año hubo grandes manifestaciones: fue una verdadera primavera obrera. Pero duró muy poco. En 1959, el gobierno retomó la ofensiva y reprimió violentamente a los ferrocarrileros, el ejército tomó las instalaciones del sindicato y encarceló a sus dirigentes. Demetrio Vallejo y Valentín Campa, los líderes más reconocidos, estuvieron en la cárcel diez años, mientras las autoridades impusieron nuevamente una dirección sindical charra. El gobierno no había

adoptado una forma de dominar a la clase obrera y la represión a los ferrocarrileros fue la inauguración de ese modelo de control que se extendió a todo el ámbito sindical. A partir de entonces los intentos de organización independiente fueron siempre tratados de la misma manera: mediante la represión.

El charrismo sindical, imperante en los años ochenta del siglo pasado, fue pieza clave para la aplicación de las políticas neoliberales en materia salarial. Ello explica que el gobierno pudiera derrumbar el salario de la manera tan drástica que lo hizo sin que hubiera una organización obrera capaz de evitarlo.

III

En 1982, empieza el sexenio del presidente Miguel de la Madrid. Ese año se considera el inicio del periodo neoliberal, momento en que se aplican recetas contrarias a los intereses de la clase obrera, tanto en materia salarial como, en general, en materia laboral. Se impusieron medidas que buscaban lo que ellos llamaban la flexibilización laboral, lo que significaba, entre otras muchas cosas, combatir la contratación colectiva y evitar la sindicalización.

Los contratos colectivos y los sindicatos, aún los sindicatos charros, son una molestia para las empresas, pues lo que a ellas conviene es tratar con los trabajadores individualmente y no con los trabajadores organizados. Pero la Constitución de la República, en particular el artículo 123, no había sido derogado, y la Ley Federal del Trabajo, derivada de aquel artículo, estaba vigente y garantizaba los derechos a la sindicalización, a la contratación colectiva y a la huelga. La política empresarial, con la venia del gobierno, empezó a simular el respeto a la ley, cuando en realidad pasaba por encima de ella. Se encontraron formas como la subcontratación (el llamado *outsourcing*), que coartaba la libertad de los obre-



ros, se les negaban los más elementales derechos laborales, se brincaba lo escrito en los contratos colectivos, se coartaba el derecho de huelga, se facilitaban los despidos injustificados sin necesidad de pagar las indemnizaciones a las que obligaba la ley. Se simuló la contratación colectiva con los llamados «contratos de protección».

Se pasó entonces del sindicalismo charro al sindicalismo simulado. De los contratos colectivos negociados por los charros a los contratos de protección. De los sindicatos charros a los sindicatos fantasma.

Los medios de comunicación participaron en una lucha ideológica contra los sindicatos y difundieron la idea de que la flexibilización laboral era en beneficio no sólo de los trabajadores sino del país. Sin embargo, lo que realmente sucedía, era el permiso para la contratación por horas, negando la vieja conquista de la jornada de ocho horas diarias y el séptimo día de descanso, anulando prestaciones como la de vacaciones, el pago de horas extras, la seguridad social y la jubilación. Pero todo era, en el discurso oficial y con la alegre participación de los medios de comunicación, en beneficio de la nación. En su discurso, ello permitía aumentar la producción y la productividad, atraer inversiones extranjeras y generar empleos. Los derechos de los trabajadores, los contratos colectivos, las jubilaciones, las prestaciones mínimas establecidas en la Ley Federal del Trabajo eran una carga del pasado que se debía superar en aras de la libertad del capital para contratar y despedir sin obstáculos.

La contratación por horas, sin derechos ni prestaciones, se hizo una realidad. Los contratos colectivos perdieron su vigencia real con el método de los contratos de protección. La subcontratación creció a gusto de las empresas. Así empezó el siglo XXI.

IV

Por supuesto hubo resistencia. La ofensiva contra la clase obrera en el periodo neoliberal fue sistemática y violenta, lo que produjo episodios de resistencia a lo largo de todo el periodo. Movilizaciones grandes. Algunos gremios, como el de los electricistas, los trabajadores del sindicato del hierro y el acero, mineros, trabajadores del Seguro Social, y muy destacadamente los maestros de la CNTE, protagonizaron episodios de resistencia firme.

Pero esos movimientos no fueron suficientes para detener la ofensiva neoliberal que contaba no sólo con la fuerza policiaca y la legaloide, sino también la fuerza de los medios de comunicación. Fue una santa alianza que actuó durante décadas. Los intentos de resistencia fueron parciales y aislados. El último gran golpe contra la clase obrera fue el que asestó Felipe Calderón contra el Sindicato Mexicano de Electricistas, en 2009, cuando de un plumazo desapareció la empresa Luz y Fuerza y despidió a 40,000 trabajadores. Éstos respondieron con grandes manifestaciones, lograron conservar su sindicato y, con el tiempo, algunas demandas menores. Pero el golpe había sido demoledor.

Los maestros de la CNTE mantuvieron una resistencia muy firme, masiva y extendida por todo el país. Se trata de un gremio que no sólo lucha por sus reivindicaciones laborales sino por la educación pública. Sus condiciones de trabajo son las condiciones en las que los niños se desarrollan: desde la infraestructura de la escuela hasta los materiales educativos que necesitan. La CNTE nació en 1979, de una lucha por salarios y por democracia sindical.

Para los gobiernos defensores del neoliberalismo, las llamadas reformas estructurales eran una meta dorada. En particular, tres reformas: la laboral, la educativa y la energética. Las tres logra-

ron aprobarlas, pero en todos los casos se trató para ellos de una victoria pírrica: las tres serían revertidas después del vuelco político de 2018. La reforma laboral que promovió Felipe Calderón en los últimos momentos de su gobierno (y dejó de herencia a Peña Nieto) contenía los temas centrales del sueño neoliberal. La resistencia a esa reforma no fue muy grande. Por otro lado, la reforma educativa durante el gobierno de Peña Nieto encontró una enorme resistencia de los maestros en todo el país (y no sólo de aquellos que estaban agrupados en la CNTE); pero también hubo represión, y aunque la reforma pasó por las cámaras la organización magisterial no fue destruida; por el contrario, sobrevivió con fuerza y pudo asegurar que fuera revertida en sus principales aspectos durante el primer gobierno de la 4T.

V

La política laboral de la 4T no se limitó a revertir la tendencia del salario mínimo de manera drástica, lo que por sí sólo es una medida de trascendencia histórica, pues logró incluir en el texto constitucional que los aumentos no deben ser inferiores a la inflación; con ello se garantiza que nunca más los salarios mínimos disminuyan en términos reales. Los aumentos que anualmente se determinan tendrán siempre que ser eso: aumentos reales de salarios. Hay que añadir que, a pesar de que en el primer gobierno de la transformación se duplicó el salario mínimo, aún no se ha recuperado la pérdida que sufrió durante décadas de neoliberalismo. Tendrá que mantenerse la nueva tendencia para que al cabo de unos años haya una recuperación completa.

Hay otros aspectos de la política laboral de la 4T que también son de gran trascendencia: el primero es el relacionado con las jubilaciones. Los gobiernos neoliberales promovieron reformas le-

gales que hacían imposible que los trabajadores, al final de su vida laboral, obtuvieran pensiones dignas. Después de las reformas que cambiaron el sentido solidario de las jubilaciones para convertirlas en resultado del ahorro individual, se crearon las Afores como mecanismo para las pensiones. En un primer momento, mediante la negociación del gobierno de Andrés Manuel López Obrador con las Afores, se obtuvo una mejoría relativa al acordar disminuir las comisiones que esas organizaciones bancarias cobraban, que eran muy altas comparadas con las cobradas en otros países.

En el último año del primer gobierno de la 4T, en 2024, se llevó al Congreso una iniciativa para que quienes se jubilen lo hagan con el 100 % de su salario. El mecanismo es viable económicamente, ya que el recurso se consigue juntando recursos legítimos en un fondo especial, que proviene de ganancias de empresas estatales, y de fondos en manos de las Afores, que corresponden a trabajadores que no los reclamaron y que representan una cantidad considerable. Ante ello, los opositores del PRIAN (que siempre lo son cuando se trata de iniciativas que favorecen al pueblo), inventaron que el gobierno le estaba robando su dinero a los trabajadores; sin embargo, la ley establece que esos recursos son irrenunciables por parte de los trabajadores que los generaron y en cualquier momento, no importa el tiempo que haya pasado, podrán reclamarlos. Mientras tanto, esos recursos pueden usarse para el fondo que se crea para completar las pensiones al 100 %. Los nuevos jubilados podrán hacerlo con su salario completo.

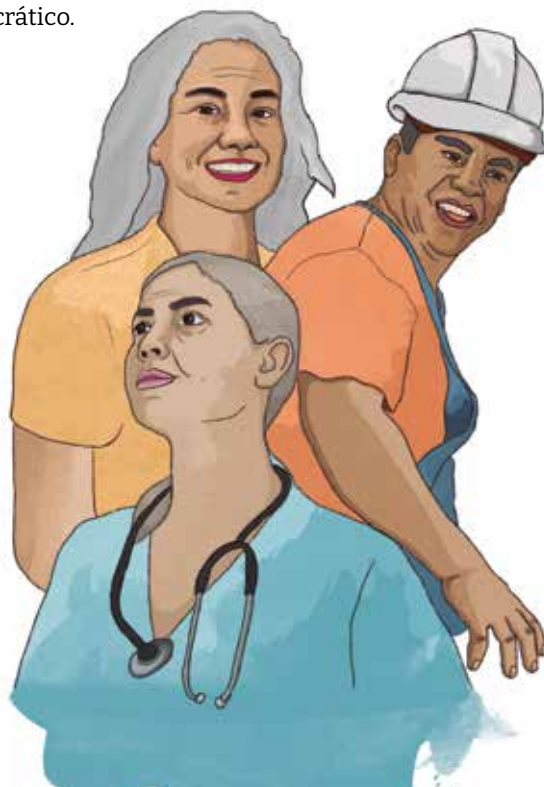
El segundo aspecto no es menos importante. No tiene que ver con la economía, sino con la libertad sindical. El 29 de abril de 2019, el Senado aprobó las reformas a la Ley Federal del Trabajo, que es la ley reglamentaria del artículo 123 constitucional. La historia de esta reforma se remonta a 2017, cuando Peña Nieto envió al congreso una iniciativa de avanzada. El motivo era ajustarse a las exigencias de un tratado comercial, el transpacífico (TPP), que obligaba a una serie de condiciones que garantizaran la democracia sindical, que limitara el *outsourcing* y que evitara los «contratos de protección». El tratado no prosperó debido al cambio de gobierno en los Estados Unidos: llegó el presidente Donald Trump, que era enemigo de nuevos tratados comerciales. Mientras tanto, la izquierda ganó las elecciones en México. En esos meses de 2018, cuando Peña Nieto era todavía presidente, se estaba pactando otro tratado comercial, el viejo TLC de Norteamérica (Canadá, Estados Unidos y México); López Obrador era ya presidente electo y envió representantes a la mesa de negociación, lo que resultó muy importante, porque evitó que se tratara a modo el capítulo del petróleo, pero también porque pudo intervenir en el capítulo laboral, que se ajustó a las demandas históricas del sindicalismo independiente. Cuando en abril de 2019 el Senado aprobó

las reformas (ya aceptadas en la Cámara de Diputados), se estaba dando la vuelta completa al modelo laboral que impusieron el PRI y el PAN.

La reforma laboral de 2019 permite garantizar la libertad sindical, la democracia sindical, la contratación colectiva auténtica (evita los contratos de protección), el voto libre y secreto dentro de los sindicatos para elegir a sus dirigentes y la rendición de cuentas de las direcciones sindicales. Además, las Juntas de Conciliación y Arbitraje son remplazadas por tribunales judiciales, lo que le quita poder al sindicalismo corporativo.

VI

Durante toda la segunda mitad del siglo XX se creó un modelo de relaciones laborales que fue funcional para el gobierno y los sindicatos charros. En los sindicatos no había democracia y los líderes se sometían a la línea que marcara el gobierno. En el último tercio de aquel siglo y los primeros años del XXI, el modelo se hizo más restrictivo con la aplicación de las recetas neoliberales. Gracias a las políticas seguidas por el primer gobierno de la Cuarta Transformación, se ha dado un giro a la historia y está en proceso la aplicación de un nuevo modelo que propicia mejores condiciones de vida para los asalariados, revalora la contratación colectiva y crea las condiciones para el surgimiento de un sindicalismo libre y democrático.



La economía mixta del sector social

LA CONSTRUCCIÓN DEL TRABAJO POSNEOLIBERAL

Óscar Rojas Silva

A la memoria de Lissette Silva Lazcano

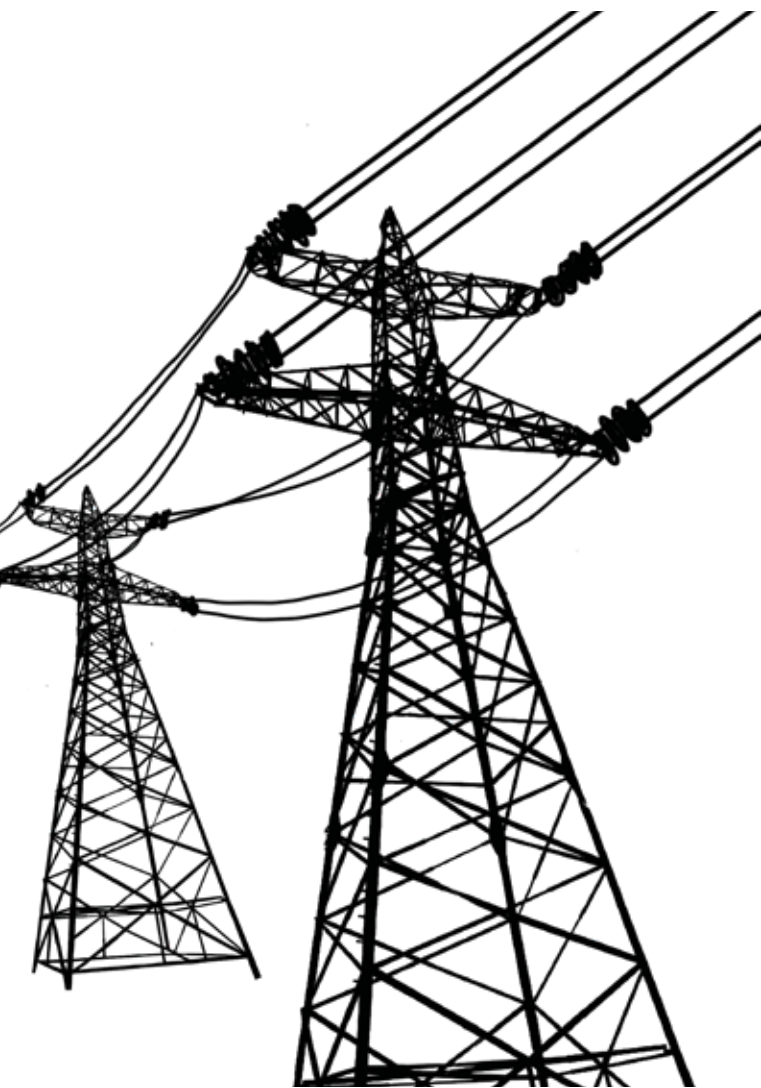
Ha concluido la primera experiencia sexenal de un gobierno que ha apostado a la transformación cualitativa por medio de la recuperación de lo social. Durante este periodo, ya se han puesto en marcha una gran cantidad de programas, medidas y proyectos a diferentes escalas de la organización de la vida pública. La velocidad con la que esto sucedió nos llama a apresurar el cambio conceptual que permita valorar la reestructuración con una visión de conjunto.

Para ello, y para efectos de seguir profundizando el movimiento, es conveniente reflexionar desde el punto de vista de uno de los cambios esenciales: la política social que operó por medio del paquete de programas sociales que constituyen el entorno de bienestar propuesto por el presidente Andrés Manuel López Obrador. Una forma de valorar esta visión se puede hacer con la revisión histórica del papel que juegan las políticas económicas en la conformación de determinado modelo.

Partiendo del reconocimiento de México como una economía mixta, la recuperación del sector social inicia por desarrollar la crítica del modelo neoliberal en cuanto a las condiciones generales del trabajo que impuso el sector privado (nacional y transnacional), pues se trató de un régimen de pauperización establecido para favorecer las ganancias del capital. En contraste, el primer sexenio de la Cuarta Transformación emprendió un proceso de recuperación del sector social mediante una serie de medidas que cruzan todo el espectro de la política pública. Además, esto ocurre en un momento de especial plasticidad histórica debido al momento de transición geopolítica que vivimos en el siglo XXI.

I. DE LA PAX NEOLIBERAL A LA RECUPERACIÓN DEL SECTOR SOCIAL

Durante el presente gobierno, se delinearon las bases fundamentales rumbo a un nuevo modelo económico. La transición hacia el segundo piso de la transformación es una excelente oportunidad para seguir clarificando los cambios estructurales que están ocurriendo en nuestro país. Al economista tradicional, entrenado desde la perspectiva del mercado como tótem absoluto, le ha costado comprender en qué consisten estos cambios fundamentales. Para esta visión ortodoxa el desarrollo económico sólo puede ser comandado bajo la racionalidad de la ganancia capitalista; en contraste, el nuevo modelo comienza con el principio «por el bien de todos, primero los pobres». Este mensaje le pasa desapercibido al ortodoxo, pues reduce el mensaje a un eslogan político cuando en este principio está contenido el ejercicio del cambio económico: el reco-



nocimiento de la prioridad estratégica del nuevo modelo que rota de la primacía del capital hacia el factor trabajo.

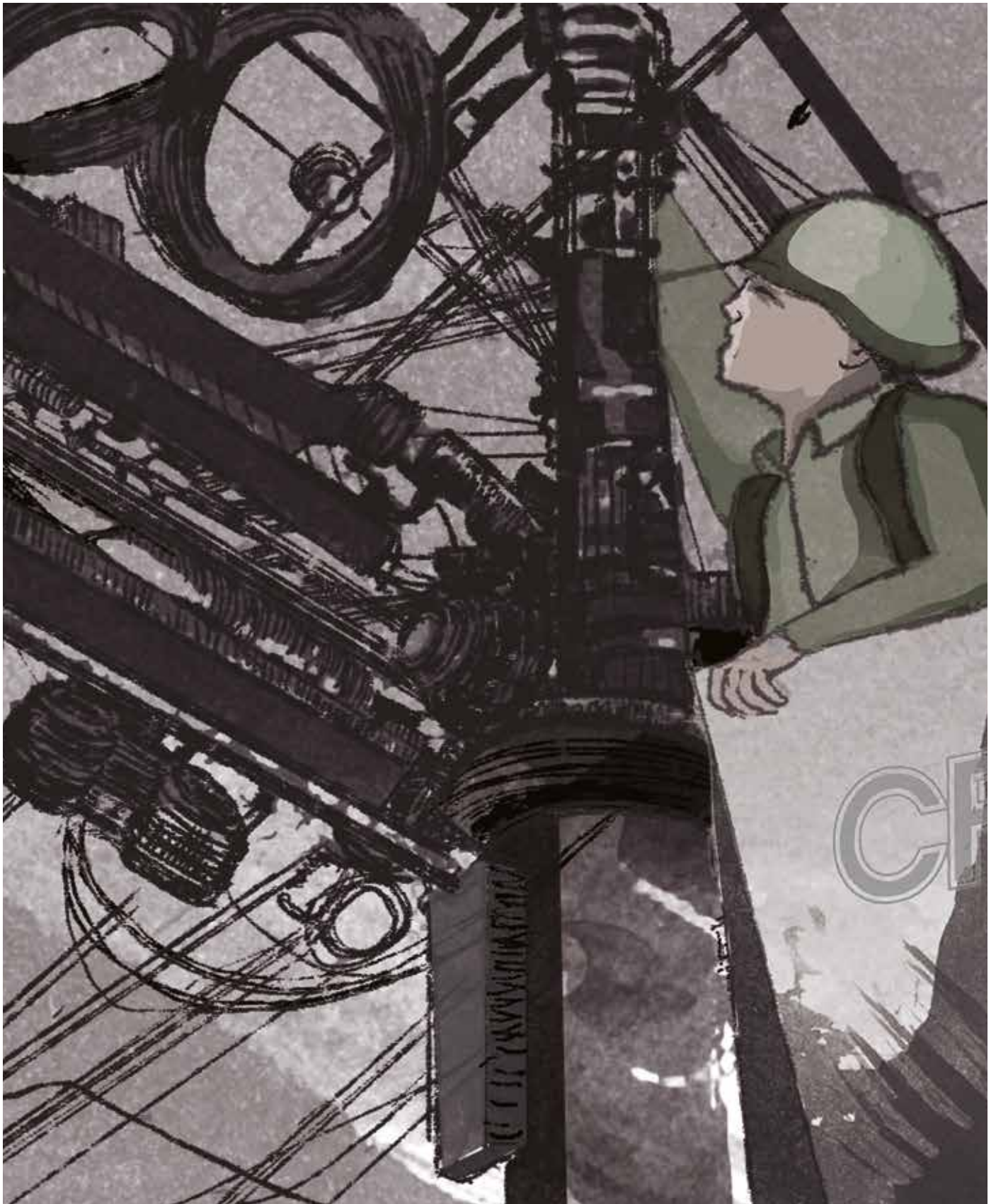
No se puede hablar del trabajo sin hablar del capital y viceversa. Estos dos elementos se mantienen en una permanente contradicción, puesto que los intereses de uno no sólo son diferentes de la otra, sino que son contrapuestos. Ésta es la problemática esencial, ya que el conflicto de clases es la fuerza de gravedad que determina el efecto de las diferentes acciones que los gobiernos pueden realizar para decidir la ruta. El análisis de estas acciones debe, por tanto, identificar la estructura dinámica globalmente y el tipo de interacciones que se generan entre sus diversos componentes. Para decirlo de otra manera, no es suficiente conocer los principios económicos en abstracto, sino conocer la realidad concreta del país, es decir, su forma económica. Para efectos de conducir el análisis de esta complejidad utilizamos la noción de modelo económico como la conceptualización que sintetiza las interrelaciones y estrategias para alcanzar objetivos estructurales.

Como señaló el expresidente Andrés Manuel López Obrador, la economía mexicana se puede catalogar como un modelo económico de carácter mixto, es decir, se trata de una economía planificada centralmente y que reconoce en su realidad la constitución de tres grandes esferas: el sector estatal, el sector privado y el sector social. La palabra sector implica que su actividad está íntimamente interrelacionada entre sí, por lo que el análisis versa en comprender las interacciones que producen que la economía se dirija en un sentido u otro. En este sentido, para efectos de la conducción del modelo, el Estado produce un tipo de política económica que concentra los criterios que el gobierno aplica y que son los que les dan viabilidad a las diferentes combinaciones posibles.

Además, el término mixto significa dos cosas adicionales: a) que el punto de partida de la economía mexicana es el de una economía capitalista con subdesarrollo crónico participando en el mercado mundial capitalista; y b) que si bien hay coexistencia con esta conformación impuesta, los objetivos no se reducen al mercado, sino que planifican una estrategia para recuperar el carácter social y la eventual posibilidad de superar las contradicciones que implica el desarrollo volcado a la acumulación¹.

Durante el siglo xx, la experiencia del desarrollo derivó en desarrollismo, debido a la existencia de una dualidad en el mo-

¹ Celso Furtado, economista brasileño siempre atento a los problemas crónicos de las economías latinoamericanas, señala: «Lo propio de la sociedad capitalista es girar en torno de la acumulación, y toda sociedad que privilegia la acumulación tiende naturalmente a reproducir los rasgos esenciales de la sociedad capitalista: diferenciación social como incitación a la competitividad, como fuente de estímulo al esfuerzo personal» (*Los vientos del cambio*, FCE, México, p. 338).



delaje de la economía: mientras que la propaganda exponía la conversión del país en una potencia industrial y moderna, la realidad significó que lo que se estaba haciendo era adecuar al país para funcionar como una economía subsidiaria a las necesidades de industrialización de los países centrales.

Además de la recuperación de la visión tripartita de los sectores económicos, el nuevo modelo de la 4T es una respuesta a este modelo del siglo pasado y adquiere, por tanto, el ejercicio de plantearse nuevos contenidos para lo que hoy se concibe como desarrollo², es decir, lo social adquiere preeminencia para comprender los postulados y el ejercicio de determinada política económica. Partimos del modelo de análisis de la economía mixta en la que se distingue un cambio: mientras que el neoliberalismo significó la omnipresencia de los intereses del sector privado por encima del estatal y el social, el modelo del humanismo mexicano significa la omnipresencia del sector social en la economía como un conjunto y comienza por la recuperación reproductiva del factor trabajo.

Cuando enunciamos el factor trabajo no se trata sólo de que la relación de dominio se vista de terciopelo, es decir, simplemente exigir mejoras en las condiciones de los derechos laborales bajo su actual dominio. No se trata de reducir el trabajo a su participación con respecto al sector privado, sino de abrir la reflexión sobre la transformación de la relación de dominio que el sector privado ejerce sobre el sector social, especialmente al momento de impulsar —mediante la captura del sector estatal— una sistemática pauperización que llevó a la población a una crisis de reproducción de la vida que generó desempleo, subempleo, informalidad, desigualdad, violencia, crimen, y que explica a grandes rasgos la insurrección electoral de 2018 con el mandato de frenar y cambiar de rumbo. Por ello, el modelo económico de la 4T, al recuperar el sector social como una esfera dinámica en sí misma, le devuelve contenido cualitativo al proceso económico. La economía mixta se transforma esencialmente en un modelo social.

El sector privado logró minar cualquier oposición del obrero organizado, desarticuló la fuerza sindical, instituyó una *pax* neoliberal (así como la porfiriana) donde se practica la verticalidad absoluta y la hiperflexibilización del salario con el engaño de ser competitivos en el acto productivo³. Esto dejó

en total indefensión al trabajador, pues se destruyeron todas las alternativas posibles para permitir el dominio monopolístico del salario adquirido capitalísticamente como única fuente para la sobrevivencia. Éste es el mecanismo de sujeción a las mencionadas condiciones. El ingreso es importante por su expresión cuantitativa, pero, cuando se trata de momentos de transición, es necesario poner atención a la cualidad, a la manera en la que se integra, especialmente cuando lo que ocurre es una diversificación de los ingresos.

De esta manera, la hipótesis esencial de la presente propuesta tiene que ver con la lectura de la recuperación del sector social, puesto que en el pasado éste fue reducido a su relación con el sector privado, pero hoy expande de nuevo su significado mediante dos elementos:

1. Recuperar la importancia de nuevas formas organizativas, considerando que el centro de disputa no se limita a la fá-

dio en la industria manufacturera cayó 11.9 por ciento entre 1980 y 2017, mientras que la productividad laboral subió un 219.5 por ciento en el mismo periodo. Recordemos que uno de los dogmas del neoliberalismo es que el salario no puede subir si no mejora la productividad, aunque la evidencia empírica muestra que la relación es al revés: si sube el salario, mejora la productividad. En el caso de México, los datos mostraban lo contrario, que la productividad subía y el salario no» («Oscurantismo neoliberal en el trabajo», en revista *Sentido Común*, núm. 16).



² Estamos en condiciones históricas de hacer una valoración global de lo que fue la experiencia del desarrollo de los países latinoamericanos durante el siglo xx, especialmente en el intercambio desigual o la superexplotación. Recomendando la lectura de Arturo Guillén et al., *Trayectorias y encrucijadas de las teorías del desarrollo en América Latina*, FCE, México, 2024.

³ Durante el periodo neoliberal la propaganda que colocaba el salario mínimo como inflacionario, cuyo aumento sólo podría ser mediante el aumento de la productividad, demostró ser falso. Por ejemplo, Luis Munguía señala: «Según el Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática (INEGI), el salario prome-

brica, sino que existe un amplio espectro de otras formas de trabajo que hasta ahora se eclipsan bajo el eufemismo del sector informal o simplemente se mantienen a la sombra como no-capitalistas.

2. Consolidar las nuevas vías de ingreso, ya sea provenientes de la redistribución fiscal y la pugna por el presupuesto (austeridad republicana), la recuperación de empresas públicas o promoviendo otras formas económicas acorde con principios cooperativos que no responden al mercado, sino a la reproducción de la comunidad humana.

Desde esta perspectiva de análisis, la política económica del actual sexenio significa la construcción de las bases de un sistema de transferencias que opera el sector estatal para el establecimiento de complementos de ingreso para la comunidad de trabajo nacional. Esta vía, además de reflejarse en la batalla por el presupuesto público, en realidad significa el momento en el cual es reconocido oficialmente el sector social como componente estructural.

Contrario a la visión neoliberal, que ve en estos flujos de recursos una dádiva o un desperdicio, lo que sucede de fondo es la diversificación de las fuentes del ingreso, puesto que, al que proviene de carácter privado o salarial, se le agrega uno de carácter colectivo. La existencia de este último produce, a su vez —dialécticamente— fuerzas que llevan a que el privado también deba transformarse. Ésta es labor para el segundo piso de la transformación.

El sector estatal, con la inscripción de estos programas a nivel constitucional y de aplicación universal, elimina el componente clientelar y comienza la construcción de nuevos derechos económicos sobre los criterios de uso del presupuesto. Es decir, no se trata de redirigir recursos productivos a los improductivos, como se suele pensar cuando de lo social se trata, sino que se trata de una nueva distribución o estrategia para el cambio estructural productivo. No sólo es justicia social, sino un criterio general de eficiencia social que permita resolver, por fin, las enfermedades crónicas de la economía mexicana.

Una de las características de este nuevo modelo es el uso de la política social como modeladora de las nuevas relaciones económicas que el trabajo colectivo tiene con respecto al proceso de acumulación existente. Lo que fundamenta la visión económica del bienestar tiene que ver con el profundo reconocimiento de que el trabajo no se reduce a la suma de los contratos individuales (ésta reflejaría la magnitud de la masa salarial), sino al reconocimiento de que el valor producido proviene de la combinación colaborativa del trabajo social visto como un conjunto. Por ello, la política social de la 4T representa una revalorización del esfuerzo colectivo, lo que significa que el sector social participa del fruto de su propio trabajo, no sólo por vía individual, sino también en tanto colectividad.

II. LA (DIFÍCIL) HISTORIA ECONÓMICA DEL PAÍS Y EL MUNDO MULTIPOLAR

En el modelo neoliberal las condiciones laborales provocaron una fuerte crisis que aún se siente en la experiencia corporal⁴ de las y los trabajadores en sus relaciones laborales con el sector privado. La verticalidad y despotismo son características del clásico concepto de enajenación, según el cual el trabajo reduce su humanidad gracias a las condiciones de repetición y fragmentación. Cuestiones que, si son válidas para los países altamente industrializados, son aún peores en América Latina, donde las extensas jornadas laborales motivan el uso de prácticas que las empresas no pueden llevar a cabo en otros países debido a la existencia de estructuras sindicales; prácticas que buscan evitar que las y los trabajadores alcancen reconocimiento de sus derechos básicos por medio de argucias legales.

La economía política —desde la clásica, incluso— siempre ha sido particularmente sensible al estudio del enfrentamiento directo entre el capitalista y el trabajador, el cual se concibe como un momento de deshumanización, es decir, un despojo de contenidos y sentidos sociales para concentrarse en la productividad del capital. Marx es la referencia más acabada para explicar cómo ese proceso es necesario para el capitalismo⁵, es decir, no se puede superar mientras continúe el desarrollo de las leyes de evolución capitalista. En ese mismo sentido, no se debe olvidar que la existencia de las economías nacionales está inmersa en la economía planetaria, por lo que la reestructuración del factor trabajo es un asunto que involucra a los sectores sociales del mundo. Por eso, la noción de modelo económico es necesaria para la combinación funcional, pero también para la modulación o tipo de conexión de la economía nacional con la economía global.

La historia económica de nuestro país nos indica la existencia de una economía colonial esclavista (1521-1821) basada en el sector primario. Después, el siglo XIX significó un fuerte combate por la recuperación de activos económicos para la re-

⁴ El término corporal es utilizado para sintetizar la materialidad histórica del trabajo en determinado momento del desarrollo del modelo económico en cuestión. Franz Hinkelammert señala: «Estas necesidades humanas a las que nos referimos no se reducen a las necesidades fisiológicas —aquellas cuya satisfacción garantiza la subsistencia física, biológica de la especie—, aunque obviamente las incluyen. Se trata más bien de necesidades antropológicas (materiales, culturales y espirituales), sin cuya satisfacción la vida humana sencillamente no sería posible. Hablamos entonces de necesidades corporales, puntualizando que la corporalidad a la que nos referimos no es únicamente la de nuestro cuerpo físico, sino también la de nuestro cuerpo social, cultural y espiritual» (Franz Hinkelammert y H. Mora, *Hacia una economía para la vida*, Universidad Michoacana de San Nicolás Hidalgo/Editorial Universidad Nacional de Costa Rica, México, p. 35).

⁵ La necesidad dialéctica se refiere a que la existencia de determinado proceso es la consecuencia del desarrollo de ciertas condicionantes y se escapa de ser un acto proveniente de la voluntad. Se convierte en una necesidad lógica del sistema, en tanto su existencia deriva de las condiciones objetivas de su propio metabolismo.

pública (por ejemplo, con las Leyes de Reforma de 1857), aunque inmediatamente el porfirismo dio entrada, en el último tercio del siglo, a la primera oleada de capitales extranjeros con licencia para explotar. En este periodo, México tuvo su primera experiencia con un proceso de industrialización, pero con el influjo de la explotación primaria y el despojo de tierras a la población, lo que condujo al estallido de la Revolución Mexicana.

Derivado de ello, se gestó un fuerte espíritu social en México cuyo mejor ejemplo es el cardenismo, con el que se proyectó un modelo económico de recuperación del sector social expresado en el sector primario (reforma agraria), autonomía energética (expropiación petrolera) y producción industrial propia, en el que se impulsó una fuerte intervención del Estado para alcanzar los objetivos propuestos. Simultáneamente, en este periodo comenzó el periodo de guerras industriales capitalistas en las que cambió el polo geopolítico, que pasó de Europa a Estados Unidos.

Estos dos elementos son la dualidad del modelo de industrialización por sustitución de importaciones (ISI), que cobró fuerza desde la maduración del Estado mexicano, en los años cuarenta, hasta 1982. En esta etapa surgió el primer ejercicio de estado de bienestar mediante la conformación de las instituciones de seguridad social; sin embargo, el modelo fue interrumpido por el cambio de rumbo del patrón de acumulación estadounidense, que redujo a México, como a todas las naciones del continente, a economías subsidiarias.

Fue la irrupción del neoliberalismo, que ocurrió en el momento en que Estados Unidos dejó de necesitar asistencia en la fuerza productiva industrial (lo que había ocurrido por la obligación de enfrentar la II Guerra Mundial) y comenzó a tomar control del nuevo orden mundial, modificó la polaridad hacia los canales de deuda y especulación financiera y provocó que

la apertura y penetración de los capitales extranjeros eliminara cualquier medio regulatorio de la economía. En este momento, el proceso de sustitución fue el de capitales nacionales por internacionales, lo que provocó una lluvia de privatizaciones y el proceso de desindustrialización.

El modelo dominante durante el periodo que corre de 1982 a 2018 fue el neoliberalismo, también denominado modelo liderado por exportaciones (MLE). Éste significó la hipertrofia del sector externo a costa del mercado interno y provocó la

pauperización del factor trabajo al incentivar la apertura indiscriminada de países como el nuestro. Con su enfoque, el consumo nacional fue transformado en un nuevo mercado para las transnacionales, lo que trajo, entre otras cosas, la imposición de alimentos y subalimentos que enfermaron a toda la población, hecho que se develó como un problema extremadamente grave al enfrentar una pandemia como la covid-19. Además, este periodo se caracterizó por una política acelerada de privatizaciones que hicieron imposible cualquier intento autónomo de industrialización, al mismo tiempo que lo financiero se convirtió en la fuerza

dominante mediante la transformación del crédito productivo en crédito al consumo, que implicó que el trabajo no sólo tuviera magros ingresos, sino una condición de deuda permanente⁶. Es decir, el subdesarrollo crónico neoliberal regresó a las y los trabajadores a una condi-



⁶ Maurizio Lazzarato apunta: «La confianza, condición del obrar, se metamorfosea en desconfianza de todos hacia todos y se cristaliza a continuación en demanda de "seguridad". La circulación de las deudas privadas es una circulación de intereses egoístas e individuales. Presupone, bajo la apariencia del reconocimiento del otro, una desconfianza previa, ya que el otro es un rival, un competidor o un deudor» (*La fábrica del hombre endeudado: ensayo sobre la condición neoliberal*, Amorrortu Editores, Buenos Aires, 2011, p. 65).

ción semiesclavista, con tiendas de raya vestidas de centros comerciales.

Pero a partir de 2018, el modelo de la 4T dio un giro hacia una economía mixta y recuperó la dimensión social mediante la reconstrucción de la infraestructura básica como vía para garantizar las condiciones generales de trabajo. En este sentido, podemos enunciar que el modelo actual tiene una vocación social similar al momento histórico anterior a 1982, y opta por lograr un tipo de industrialización que permita sentar las bases de una economía mixta con un sector social omnipresente, aunque instalada dentro de la lucha geopolítica del mercado mundial de la que no se puede abstraer. Eso nos obliga a comprender claramente la relación con el exterior, pues es una condicionante que debe ser tratada explícitamente.

La economía mexicana, como cualquier otra economía del mundo, está determinada en menor o mayor grado por el desarrollo del mercado mundial. Es decir, hay una simbiosis estructural entre el mercado interno y el mercado exterior, según tres influencias: a) el capital comercial, b) el capital productivo y c) el capital financiero. Ésta es la razón por la que resulta imposible cerrar el mercado interno según técnicas arancelarias tradicionales y por la que una política industrial implica regular entonces el tipo de coevolución entre esas tres influencias, así como entre mercado interno y externo, hecho que no se reduce a una cuestión económica meramente técnica, sino que implica una visión integral del movimiento geopolítico y de sus implicaciones para la soberanía nacional, es decir, la relación de fuerza y circunstancia entre el poder global y los grados de autonomía de nuestro país, variable que no debe separarse de los análisis del desarrollo mexicano.

Considerando las dimensiones actuales del proceso de transformación del modelo económico, podemos decir que la 4T llegó en un momento histórico marcado por la crisis estructural de la potencia económica del norte, consecuencia de la financiarización que provocó la desindustrialización de los EUA, al mismo tiempo que se producía la industrialización de China, impulsada con fuerza desde los años noventa. Mientras que el modelo ISI (1945-1982) era acompañado por una super potencia recién surgida que desplegaba todos sus poderes, el actual proceso de reindustrialización ocurre bajo el ocaso de este poder, el cual muestra mecanismos de recogimiento a escala regional y con serios problemas en su propia estructura social⁷. Estas condicionantes son de gran relevancia para nuestra es-

trategia, puesto que ocurren en el tránsito del mundo unipolar al mundo multipolar.

En este contexto, la primera gran tormenta de relocalización está surgiendo, pues el *nearshoring* ha comenzado como una oportunidad que nuestro país tiene en este proceso para atraer inversión extranjera directa. Para aprovechar este momento, la política industrial necesita comprender las actuales circunstancias y proyectar un plan de acción que permita superar la experiencia de la maquila neoliberal, modelo que no sólo no transmitió tecnología ni significó mejora en las condiciones de las y los trabajadores, sino que expolió la naturaleza y tomó ventaja de un régimen fiscal creado sólo para beneficio del interés privado. Esta nueva ola de inversión extranjera se presenta como un fenómeno derivado del surgimiento de un orden multipolar, pero necesita de una política industrial seria para la reactivación del mercado interno mediante una reconexión distinta (no neoliberal) con el mercado externo.

III. LA LUCHA POR EL PRESUPUESTO Y LA POLÍTICA SOCIAL

Uno de los elementos para observar la cualidad del cambio que vivimos es el presupuesto público. El sector estatal tiene como característica esencial su poder de redistribución, el cual se ve acotado por la deuda, los intereses y las relaciones de poder que expresan la arquitectura financiera global. En estos momentos, se trata de una lucha social y política por el diseño del presupuesto, ya que se juega la posibilidad de modular el problema económico general mediante estrategias que deben mostrar la capacidad programática de la planificación centralizada.

En este sentido, no se debe olvidar que el derecho económico sobre el presupuesto implica no sólo las transferencias directas (que constituyen un nuevo tipo de ingreso para el sector social), sino también la mejora estructural de las condiciones generales del trabajo. La infraestructura básica tiene por objetivo permitir que un mayor metabolismo productivo eleve las posibilidades de desarrollo del sector social, lo que significa que su contribución no debe ser sólo con respecto a la ganancia capitalista, sino para multiplicar el bienestar y la mejora de la vida.

La etapa neoliberal, durante el régimen del MLE, tuvo como característica ofrecer un paraíso para la acumulación de terceros, para lo cual generó condiciones para el establecimiento de bajos costos de la fuerza productiva (siempre con el concepto eufemístico de hacernos más «competitivos») y el aumento de los márgenes de ganancia. La reducción del costo del trabajo fue una de esas estrategias esenciales, y en ello se explica que el salario mínimo perdiera durante el periodo el 75 % de su poder adquisitivo. Además, se efectuó

⁷ Considérese la crisis de fentanilo y adicciones a opioides. Es una ironía de la historia que la sociedad estadounidense esté bajo una guerra del opio como la que sufrió China frente al imperialismo británico, sólo que ahora provocada por la propia industria farmacéutica transnacional.

una especie de *fracking* laboral a través del cual se permitieron estrategias agresivas como el *outsourcing* o los múltiples esquemas de subcontratación que operan desde entonces en el país.

El modelo de gestión del trabajo del modelo neoliberal implicó la autonomía absoluta del sector privado para ejercer políticas laborales. El sector estatal, en cambio, se dedicó a desmantelar lo poco que quedaba del primer estado de bienestar mexicano, que permitió la modificación del marco legal con el fin, entre muchos otros, de convertir a las instituciones de seguridad social en campos de lucro para las empresas. En este sentido, destacó el caso del sector salud, cuya situación deficiente se evidenció, después de años de neoliberalismo, durante la reciente pandemia; también, podemos ver el caso de las pensiones, cuya privatización generó que este esquema no pudiera cumplir con su única función: proveer de un ingreso digno a las generaciones de trabajadores en retiro. Asimismo, el sector educativo se convirtió en un terreno bajo el ataque del sector privado, además de que se impulsó una política estatal cuyo objetivo era reducir la experiencia de la enseñanza-aprendizaje a una mera capacitación técnica pensada para aumentar la eficiencia en los centros de trabajo. Es decir, la política educativa fue privatizada para satisfacer la productividad capitalista.

En contraste, con el nuevo modelo impulsado a partir de 2018, la Nueva Escuela Mexicana busca recuperar la visión del proceso educativo como parte de la dinámica social, lo que significa reconocer que la educación es de suma importancia para la determinación del modelo económico, en tanto que es con un modelo educativo que se puede trazar el tipo de socialización de una comunidad. En este sentido, no hay que olvidar que el humanismo mexicano es también una recuperación de la historia de lucha del pueblo mexicano inspirada en el principio social originario: la cooperación⁸. Es decir, la visión neoliberal que postula la competencia de mercado necesita del desarrollo de un cierto egoísmo individualista que sólo puede ser superado por medio de la cooperación social en la que las y los trabajadores se reconocen en tanto sector social, como seres que son sólo en sociedad, cuyo destino se encuentra en el destino de todos. Pero no se trata de una falsa socialidad en la que las personas cooperan sólo por interés propio, sino de una auténtica revolución de las concien-

cias que busca identificar con claridad los problemas reales e insiste en tomar conciencia de que el interés del otro es mi interés, un acto de solidaridad en el que pongo al otro como un fin en sí mismo. Esto genera un nuevo campo de la práctica política del sector social: la empatía organizativa. El sector privado es renuente a la organización independiente de las y los trabajadores, por eso en los sindicatos dominan formas verticales que, contrario a sus objetivos históricos, los convierten en administradores de la fuerza de trabajo para beneficio de los patrones.

Con el fin de enunciar y definir el nuevo modelo de la Cuarta Transformación, podemos indicar sus características esenciales: se trata de la reactivación de la industria, la recuperación del mercado interno y el intento de estabilizar su coevolución con el mercado externo. Esto significa que se debe transformar el tipo de metabolismo existente entre la inversión extranjera y su absorción con el trabajo social mexicano, especialmente en materia de transmisión de tecnología con énfasis en un efecto multiplicador que genere cadenas productivas en lo general, pero también espacios económicos que surjan desde la inversión nacional. El nuevo modelo, desde la óptica de la recuperación del sector social, procura la autonomía económica para nuevas relaciones económicas, mismas que en la medida que se alejan de la competencia comienzan a generar una visión abocada a la cooperación.

IV. CONCLUSIONES. EL TRABAJO POSNEOLIBERAL

La historia de la humanidad es la historia del trabajo, pues es la gran actividad con la que la especie humana construye sus diversas formas evolutivas. Por eso, no es un detalle menor que la visión del trabajo neoliberal parta del individualismo egoísta en un proceso de franca deshumanización; para superar esta condición es necesario poner en marcha procesos de humanización que asuman una visión desde la comunidad.

El camino de liberación que hemos puesto en marcha todavía debe librar distintas batallas, por ello la importancia de comprender las fuerzas que interrelacionan los diferentes sectores de la economía, ya que sólo así podremos proponer un esquema que nos aleje del subdesarrollo crónico y nos permita explorar, según las condiciones de cada país, otras formas de relación basadas en una perspectiva social y comunitaria. Ése es el sustento, por ejemplo, de lo que recientemente se ha comenzado a llamar con el concepto de economía social y solidaria, y cuyo objetivo es la conformación y propagación de nuevos mecanismos de colaboración productiva y comercial a través de formas de propiedad diferentes a la propiedad privada capitalista, es decir, mediante la forma cooperativa.

⁸ En este sentido, Andrés Manuel López Obrador apunta que «el humanismo mexicano se sostiene en perfecto equilibrio en dos pies, uno es el de la gran herencia cultural prehispánica que nos alimenta de virtudes excepcionales como la fraternidad, la libertad, la justicia y la honestidad; y el otro es el de la política con dimensión social y carácter público que llevaron a la práctica, como en pocos lugares del mundo, nuestros próceres abnegados y ejemplares» (¡Gracias!, Editorial Planeta, México, p. 502).

Génesis del artículo 123

Felipe Ávila Espinosa

Para Venustiano Carranza, un liberal moderado formado en la tradición del liberalismo decimonónico mexicano, entender el problema laboral de fines del siglo XIX, pero sobre todo de los comienzos del siglo XX, siempre fue muy complicado. Si bien era partidario de cierto tipo de reformas, como establecer el salario mínimo, la jornada máxima de trabajo, las indemnizaciones por accidentes laborales y estaba también a favor de la intervención del Estado para mediar en los conflictos obrero-patronales, dichas reformas y mediación tenían un límite: que no se salieran del marco institucional y no pusieran en riesgo la viabilidad económica de las empresas. El primer jefe era contrario al radicalismo laboral, a las huelgas que afectaban a otras actividades productivas y comerciales y a la sociedad, y estaba en contra de las huelgas políticas que ponían en riesgo la seguridad y la paz pública. Estas convicciones definieron su actitud ante las relaciones obrero-patronales desde que estuvo al frente del gobierno de Coahuila y durante su gobierno preconstitucional. Esa misma postura, de un reformismo laboral moderado, fue la que se expresó en su propuesta laboral ante el Congreso Constituyente de 1916.

El artículo 5º del proyecto de Carranza, similar al de la Constitución de 1857, sólo establecía que nadie podía ser obligado a trabajar sin su consentimiento y sin la justa retribución salarial. Sin embargo, en la exposición de motivos de su proyecto de reformas a la Constitución, Carranza confirió al Poder Legislativo la facultad de expedir leyes sobre el trabajo y marcó los lineamientos que debían seguir los legisladores: limitar la jornada laboral; fijar el salario mínimo; establecer la responsabilidad de los empresarios en los accidentes laborales y fijar los seguros por enfermedad o vejez de los trabajadores.

Esa propuesta fue considerada por los diputados como totalmente insuficiente para las demandas de la revolución, y es conocida la respuesta que el obrero y diputado yucateco, Héctor Victoria, dió contra el dictamen presentado por los carrancistas¹. De acuerdo con Pastor Rouaix, esa propuesta «no contuvo disposiciones especiales de gran alcance que tendieran a establecer preceptos jurídicos para conseguir la renovación del orden social en que había vivido la nación mexicana»². Para enmendar ese artículo, se formó una comisión especial encabezada por el propio diputado Pastor Rouaix, a la que se sumaron José Natividad Macías, Luis Manuel Rojas, Esteban Baca Calderón y Rafael Martínez de Escobar para formular un proyecto de capítulo laboral.

La primera formulación de lo que sería el artículo 123 la hicieron los diputados veracruzanos Cándido Aguilar, Heriberto Jara y Victorio Góngora, quienes propusieron una jornada máxima de trabajo de 8 horas, prohibir el trabajo nocturno para mujeres y niños menores de 14 años, descanso dominical obligatorio, derecho de huelga, indemnización por accidentes laborales y salario igual por trabajo igual.

La Comisión retomó y amplió las ideas de los diputados veracruzanos y las presentó al pleno el 13 de enero de 1917. El proyecto, a su vez, fue revisado por la Comisión de Constitución, que sintetizó las ideas y propuestas hechas durante la discusión. Quedó así formulado el artículo 123, que fue un ejemplo de legislación laboral avanzada para el mundo. Fue aprobado

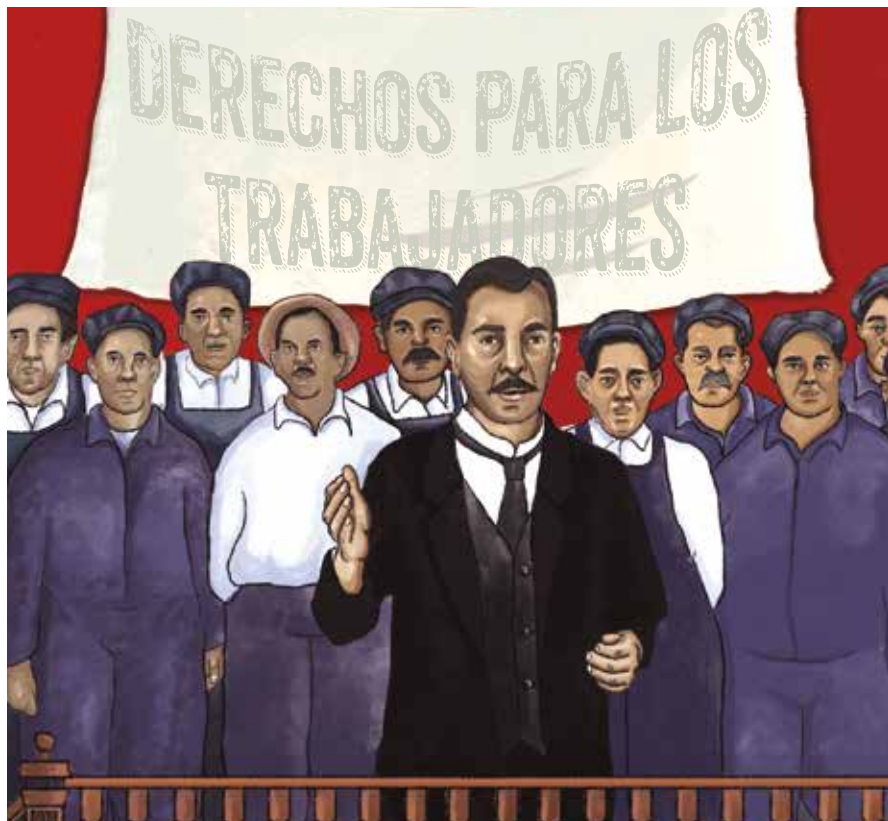
por unanimidad de 163 votos el 23 de enero de 1917. En su parte medular, el artículo quedó así:

Artículo 123. I. La duración de la jornada máxima será de ocho horas. II. La jornada máxima de trabajo nocturno será de siete horas. Quedan prohibidas las labores insalubres o peligrosas para las mujeres en general y para los jóvenes menores de 16 años. Quedan también prohibidos a unos y otros el trabajo nocturno industrial. III. Los jóvenes mayores de 12 años y menores de 16, tendrán como jornada máxima

la de seis horas. IV. Por cada seis días de trabajo deberá disfrutar el operario de un día de descanso. V. Las mujeres, durante los tres meses anteriores al parto, no desempeñarán trabajos físicos que exijan esfuerzo material considerable. En el mes siguiente al parto disfrutarán forzosamente de descanso, debiendo percibir su salario íntegro y conservar su empleo.

El artículo aprobado por el Constituyente rebasaba ampliamente la propuesta original de Carranza. Recu-

peraba las principales demandas obreras que habían sostenido los trabajadores mexicanos durante décadas, a través de una larga tradición de lucha y resistencia que había enfrentado rechazo, persecuciones y represión, y que había costado muchas vidas y sacrificio. Finalmente, esas aspiraciones cristalizaron en un capítulo laboral avanzado, progresista, que incorporó esas demandas como derechos sociales dentro del texto constitucional y que fue un programa para el movimiento obrero mexicano a lo largo del siglo XX y un modelo para las luchas laborales en otras partes del mundo. Esos principios, sin embargo, no fueron fáciles de aplicar por el gobierno de Carranza, quien tampoco estuvo muy convencido de la forma que adoptó ese capítulo en el Constituyente y se le dificultó aplicarlo en su gobierno.



¹ Héctor Victoria, «Discurso del diputado Héctor Victoria. Los artículos 5 y 123», en *Los grandes discursos del Congreso Constituyente*, Radio Educación, México.

² Pastor Rouaix, *Génesis de los artículos 27 y 123 de la Constitución Política de 1917*, INEHRM, México, 2016, p. 180-183



BIENESTAR PARA TODOS Y TODAS

EL MUNDO DEL TRABAJO EN EL SEGUNDO PISO DE LA 4T

- Los salarios aumentarán por encima de la inflación.
- Se mejorarán las pensiones de los trabajadores.
- Aumento progresivo del salario de:
 - ▷ Docentes.
 - ▷ Personal médico.
 - ▷ Guardia Nacional.
 - ▷ Soldados y marinos.
- Seguridad social obligatoria para trabajadores de apps.
- Instauración paulatina de la semana laboral de 40 horas.
- Recuperación de la fuente laboral de trabajadores de AHMSA y rescate de mineros de El Pinabete.
- Créditos a la palabra a mujeres indígenas artesanas.
- Remuneración justa para artistas mexicanos y seguridad social.
- 150 mil mujeres serán reconocidas con derechos agrarios.
- Continúan todos los Programas para el Bienestar.
- Pensión bimestral para todas las mujeres de 60 a 64 años.
- México será potencia tecnológica y de innovación.
- Programa de desarrollo tecnológico para el desarrollo nacional.
- Consolidación del IMSS Bienestar.
- Soberanía alimentaria y precio justo de la tortilla.
- Seguridad social a jornaleros agrícolas y pesca.
- Apoyo a pequeños y medianos productores de frijol y creación de una empresa nacional de semillas.
- Programa Cosechando Soberanía.
- Se crea Alimentación para el Bienestar.
- Plan especial para Campeche y Tabasco para producir arroz, leche y carne.
- Construcción de línea del Tren Maya a Progreso.
- Implementación del transporte de carga en el Tren Maya.
- Conformación del Consejo Nacional para el Desarrollo Regional y la Relocalización para crear polos de desarrollo y 100 nuevos parques industriales.
- No aumentarán los precios de energéticos ni canasta básica.
- No regresará el modelo neoliberal.

Conoce los 100 compromisos para el segundo piso de la transformación.
Escanea el QR y descarga el documento completo.





Art. 123
toda persona tiene derecho
de trabajo libre y
socialmente útil; al efecto,
se promoverá la creación
de empleos y la
organización social de
trabajo, conforme a la ley.

**BIENESTAR
PARA LOS
TRABAJADORES**